C O R T E S

DIARIO DE SESIONES DEL

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

COMISION DE ECONOMIA Y HACIENDA

Sesión número 2

PRESIDENTE DE LA COMISION: Don Jaime García Añoveros

Sesión celebrada el martes, 27 de septiembre de 1977

S U M A R I O

Se abre la sesión a las cinco y diez minutos de la tarde.

Antes de entrar en el orden del día, el señor Presidente, interpretando el sentir de toda la Comisión, pronuncia unas palabras de condena y de dolor por el atentado que ha tenido lugar en el día de hoy y que ha costado la vida a un miembro de la Policía Armada, perpetrado por elementos que tratan de desestabilizar el proceso democrático iniciado en España.

Se entra en el orden del día:

Medidas urgentes de reforma fiscal.

El señor Presidente explica el procedimiento que ha de seguirse para discutir y aprobar este proyecto de ley, de acuerdo con las normas especiales que han sido acordadas con este fin.—Según dichas normas, en pri-

mer lugar defenderá el proyecto un Diputado designado por el Gobierno, y a continuación hablarán para exponer sus puntos de vista en relación con el tema, los representantes de los Grupos Parlamentarios que lo deseen.

De acuerdo con lo expuesto por el señor Presidente, hace uso de la palabra, en primer lugar, el señor Rodríguez-Miranda Gómez, de Unión de Centro Democrático, que es el Diputado designado por el Gobierno para defender el proyecto de ley.

A continuación, y por este orden, hacen uso de la palabra para exponer sus puntos de vista sobre el proyecto los representantes de los Grupos Parlamentarios siguientes: señores Trias Fargas (por el Grupo Parlamentario vasco-catalán); Barón Crespo (por el Grupo Parlamentario Socialista); Sánchez Ayuso (por el Grupo Parlamentario Mixto)

y López Rodó (por el Grupo Parlamentario de Alianza Popular).

Se suspende la sesión.

Se reanuda la sesión.—Siguen las intervenciones de los representantes de los Grupos Parlamentarios por el siguiente orden: señor Lluch Martín (por el Grupo Parlamentario Socialistas de Cataluña).—El señor Rodríguez Alcaide hace una observación a la Presidencia.—Contestación del señor Presidente.—Siguiendo el orden de los Grupos Parlamentarios, hace uso de la palabra el señor Tamames Gómez (por el Grupo Parlamentario Comunista).—Al anunciar el señor Presidente que va a hacer uso de la palabra un representante del Grupo Parlamentario de Unión de Centro Democrático, el señor Barón Crespo hace una observación, a la que contesta el señor Presidente.—Replica el señor Barón Crespo, pidiendo que conste en acta la protesta del Grupo Parlamentario Socialista por el hecho de que se conceda el uso de la palabra para exponer su criterio sobre el proyecto de ley a un representante del Grupo Parlamentario de Unión de Centro Democrático, puesto que ya lo ha hecho el señor Rodríguez-Miranda Gómez por el mismo Grupo.—Interviene, en representación del Grupo Parlamentario de Unión de Centro Democrático, el señor Gamir Casares, a quien el señor Presidente hace una observación.—El señor López Rodó se une a las palabras anteriores del señor Barón Crespo en relación con la duplicidad de intervenciones sobre el proyecto de ley.—Continúa el señor Gamir Casares en su exposición con relación al proyecto de ley.

El señor Presidente anuncia que se continuará en la sesión de mañana la deliberación sobre el articulado y pide a los representantes de los Grupos Parlamentarios se reúnan con la Mesa unos minutos antes para dar cumplimiento a lo que establece el artículo 9.º de las normas especiales para la discusión del proyecto de ley que se está examinando.

Se levanta la sesión a las nueve y diez minutos de la noche.

Se abre la sesión a las cinco y diez minutos de la tarde.

MEDIDAS URGENTES DE REFORMA FISCAL

El señor PRESIDENTE: Vamos a iniciar el debate del proyecto de ley sobre Medidas Urgentes de Reforma Fiscal.

Antes de entrar en el inicio del debate, permítanme manifestar, creyendo interpretar el sentimiento de todos los Grupos representados en esta Comisión, nuestro dolor y sentimiento por el acto terrorista que ha tenido lugar en el día de hoy y que ha costado la vida a un Capitán de la Policía Armada. Creo expresar —repito— el sentimiento de todos los miembros de esta Comisión al indicar que lamentamos el hecho y lo condenamos, deplorando que se intente por estas vías extralegales atentar contra esta naciente democracia.

De acuerdo con lo establecido en las normas que regulan el debate en esta Comisión, corresponde iniciarlo mediante la defensa del proyecto por un Diputado o Ministro designado por el Gobierno. A continuación, seguirá la exposición de los criterios sustentados acerca del proyecto por los distintos Grupos Parlamentarios, cuyas intervenciones se producirán según el orden que fije el Presidente. Estas intervenciones, según el Reglamento por el que nos regimos en este momento, no podrán exceder en ningún caso de treinta minutos.

El Gobierno ha designado para defender el proyecto al Diputado don Santiago Rodríguez-Miranda, quien será el primero que hará uso de la palabra.

A continuación intervendrán los representantes que lo estimen conveniente de los Grupos Parlamentarios por el siguiente orden: en primer lugar, el Grupo Parlamentario Vasco-Catalán; en segundo, el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso; en tercero, el Grupo Parlamentario Mixto; en cuarto, el Grupo Parlamentario de Alianza Popular; en quinto, el Grupo Parlamentario Socialista de Cataluña; en sexto, el Grupo Parlamentario Comunista, y, en séptimo lugar, el Grupo Parlamentario de Unión de Centro Democrático.

Por tanto, tienen la palabra don Santiago

Rodríguez-Miranda, como Diputado designado por el Gobierno para la defensa del proyecto.

Ruego a todos los señores Diputados que han de intervenir que, por favor, se atengan con carácter estricto a la duración fijada para cada una de las intervenciones.

El señor Rodríguez-Miranda tiene la palabra.

El señor RODRIGUEZ-MIRANDA GOMEZ: Señores Diputados, espero que con mi voz pueda llenar el vacío casi total de esta sala, y creo que la ausencia de personas en ella no corresponde a una ausencia de interés en el tema que aquí se va a tratar y que hoy me corresponde a mí presentar en nombre del Gobierno.

Vamos a presentar una ley en orden a la Reforma Fiscal y otras Medidas Urgentes con ella emparentadas, que por un extraño azar de la historia se ha transformado en la primera ley de la democracia, en la primera ley en la que el pueblo español, a través de los Diputados libremente elegidos el 15 de junio, va a expresar su parecer acerca de lo que debe ser el futuro de nuestro ordenamiento tributario, el futuro de nuestro ordenamiento financiero.

La ley ha sido ya sometida a examen por la Ponencia, examen que ha dado lugar al informe que tienen los señores Diputados a su disposición. Y yo quisiera, ante todo, destacar que este proyecto de ley del Gobierno, en orden a algo que es eminentemente progresivo, como es la reforma de nuestra tributación fiscal, ha sido aceptado unánimemente por los restantes Grupos integrantes de la Ponencia, y que en todo punto ha existido un clima de diálogo y comprensión, y que en todo momento el pacto concibió la pugna y los criterios coincidentes o divergentes, han dado origen a esta nueva ley, que es, en conclusión, suma de las distintas voluntades de los representantes de cada uno de los Grupos políticos que se integran en esta Cámara.

Y es importante ello, porque esta primera ley de la democracia nace así como fruto de un pacto, como fruto de un diálogo entre cada una de las fuerzas políticas aquí integradas. Y es también importante destacar esto,

porque el Gobierno recibe aquí su primera respuesta parlamentaria al primero de los proyectos de ley aquí enviados, en el cual ha recibido una aceptación mayoritaria de lo que constituya el proyecto de ley. La reforma que va a ser contemplada ha de ser enmarcada necesariamente dentro de un fenómeno más amplio, como es el de la reforma de la tributación directa e indirecta, que permita establecer para nuestro país un conjunto de imposición más armónica, unitaria y flexible y, sobre todo, un conjunto de impuestos integrados de manera análoga a como existe en los sistemas fiscales europeos, que para nosotros constituyen meta política indudable.

Quiero decir con ello que las primeras medidas que hoy van a ser debatidas por esta Comisión del Congreso son medidas parciales, que van a constituir lo que pudiéramos llamar la infraestructura de la futura reforma tributaria, a la cual se ha comprometido el Ministro de Hacienda, y que afecta a la tributación de los impuestos directos que será remitida antes del 30 de junio, y a la tributación de los impuestos indirectos antes del 30 de noviembre.

El conjunto de medidas que van a ser discutidas a continuación de la exposición que hagamos cada uno de los miembros integrantes de la Ponencia se resume concretamente en la creación de nuevas figuras impositivas, o en la modificación de algo actualmente existente.

En segundo lugar, en la creación de la serie de palancas o medidas que han de constituir la indudable infraestructura para poder llevar a cabo y hacer efectiva la futura Reforma Fiscal, que afecta a la tributación directa e indirecta.

Y, por último, lo que dota de sentido correcto y unitario al conjunto de medidas y que se refiere necesariamente al destino de los caudales que se obtengan. Y me refiero en particular a las medidas de apoyo fiscal al empleo.

Con todo ello se trata de dar efectividad a un principio tan sagrado en derecho español y con tanta vigencia histórica como natural incumplimiento en nuestro derecho político.

Me refiero al principio de la capacidad impositiva que ya consagraban nuestras viejas

Cortes de Cádiz, y es sintomático que haya sido el primer texto constitucional, el de 1812, el que haya asentado en la historia del parlamentarismo mundial y en la historia del Derecho tributario mundial la afirmación del principio de que cada cual pague con arreglo a su patrimonio, con arreglo a lo que constituya su real situación financiera.

Este principio de tan largo establecimiento constitucional en España, sin embargo, ha estado carente tradicionalmente de una efectividad, efectividad que se pretende a través de las medidas que hoy y en sesiones sucesivas van a ser presentadas a este Congreso.

Un punto más se refiere al respeto que la Ponencia ha tenido en su informe y en la aplicación de enmiendas al mismo, intervenidas en orden a lo que constituyen los regímenes fiscales de Alava y Navarra. Queremos destacar aquí, por ser un punto de indudable importancia constitucional, que la Ponencia ha sido plenamente consciente, al igual que lo fue el Gobierno, en el momento de redactar que este problema no podía ser asumido por quienes constituyan una pura visión parcial de nuestro ordenamiento jurídico, por quienes nos íbamos a ocupar de la simple dimensión financiera tributaria del aparato estatal. En consecuencia, iba a quedar enmarcado dentro de un absoluto respeto a los regímenes actualmente vigentes, sin perjuicio de lo que en su futuro haya de ser la Constitución, en virtud de los regímenes de autonomía que hayan de establecerse para cada uno de los pueblos, nacionalidades y regiones que integran el Estado español.

En cuanto a las medidas que van a ser presentadas, en primer lugar se refieren al impuesto sobre el patrimonio de nueva creación. He destacado la colaboración de cada uno de los Grupos políticos integrantes en la Cámara porque ello ha hecho posible que este impuesto nuevo, que ha costado largos años de debates en distintos Parlamentos europeos, haya tenido acceso con la facilidad con que lo ha tenido dentro de este primer Congreso de la democracia española y se haya establecido dentro de las líneas generales en que se integra el impuesto de patrimonio en los distintos sistemas europeos.

El impuesto sobre el patrimonio es un impuesto que no es esencialmente recaudador; es un impuesto que permite una disección de la situación patrimonial de cada uno de los contribuyentes afectados y, en este sentido, es eminentemente colaborador respecto a los restantes impuestos y, en particular, a la imposición directa que se refiere al impuesto sobre la renta y al impuesto sobre herencias. Así, en dos países donde tienen su más larga tradición: Suecia y Alemania, su peso en el orden de las recaudaciones es mínimo. Mientras en Suecia alcanza un 0,5 por ciento de la global tributación, en Alemania llega al 0,9 de la misma. Así se ha establecido en el Derecho español a través del proyecto del Gobierno y del informe de la Ponencia y no se ha establecido en modo alguno como un impuesto de tipo expropiatorio extraordinario anormal, sino como un impuesto ordinario a través del cual se va a permitir dotar a la Hacienda Pública de un instrumento tan poderoso como es el conocimiento de la situación estática del patrimonio y de cada uno de los contribuyentes afectados.

El informe de la Ponencia ha sido ratificar salvo en lo relativo a las bases, que han sido objeto de una nueva redacción en un sentido de perfeccionamiento, toda vez que hemos debido de contemplar necesariamente qué patrimonios se refieren a conceptos dobles, de una parte, afectos a una idea de flujo y, de otra parte, pueden ser contemplados estáticamente, lo cual ha de reflejarse cuando se trata de la contemplación de su dimensión cuantitativa y cuando se trata de las bases. Las tarifas del Gobierno, por el contrario, han sufrido, a través del Informe de la Ponencia presentado en forma unánime, una gradación que permita un acercamiento a las distintas situaciones tributarias de los sujetos afectados. Quiero recalcar esto porque frente a los dos criterios existentes en la tradicional imposición sobre el patrimonio, el Derecho español se acerca, a través del proyecto que vamos a discutir, a un sistema de tributación graduada que empieza con una escala de 0,20 por ciento para llegar al límite de 2,30.

En cuanto a los impuestos sobre el rendimiento del trabajo personal se trata de una medida excepcional a través de la cual se

efectúa una llamada a la solidaridad a aquellos sectores económicos detentadores de mayor volumen de riqueza, a través de un impuesto excepcional anormal, no deducible del impuesto general sobre la renta de las personas físicas y en el cual el informe de la Ponencia ha aceptado el proyecto gubernamental estableciendo, eso sí, una nueva graduación de la tarifa en la cual se efectúa también esta diferenciación, en orden a los distintos niveles impositivos y este acercamiento necesario a lo que constituye diferencias de bases de tributación.

Por último, en orden a las medidas hay una alteración del impuesto sobre el lujo, en algunos epígrafes relativos a adquisiciones y tenencias en particular en lo referente a alcoholes, aviones y embarcaciones y adquisición de vehículos.

Por último, a través de una enmienda del Grupo Comunista se efectúa un nuevo impuesto extraordinario que ya ha tenido vigencia en el derecho español en sistemas anteriores, en el cual se ordena la tributación de los beneficios extraordinarios obtenidos por las empresas en los pasados ejercicios económicos, considerándose como tales, en virtud del grave momento económico por que trasciende la situación general de la economía española, aquellos que excedan de un 8 por ciento del capital fiscal de las sociedades.

Junto a estas medidas puramente fiscales, puramente tributarias de exclusivamente recaudatorias hemos de contemplar con mayor incidencia lo que son palancas o instrumentos para la futura reforma fiscal real, que han de constituirse en elementos base para la creación de una auténtica infraestructura que permita a la Administración Pública la realización de sus funciones en orden a la recaudación de impuestos para la gestión de los bienes y servicios públicos. Y esto se resume en cuatro medidas concretas que sí que tienen carácter absolutamente nuevo en el Derecho español y son: la instauración del delito fiscal, la investigación de las cuentas corrientes bancarias, la regularización de la situación fiscal voluntaria y la publicación de las listas de contribuyentes.

En cuanto al delito fiscal se introduce en el proyecto del Gobierno una modificación sustancial del artículo 319 del Código Penal

en el cual se efectúa una alteración general de sus líneas para dar cabida aquí a lo que es una figura universalmente consagrada y es la sancionadora de las conductas que son perjudiciales al erario público en cuanto que constituyen evasiones dolosamente provocadas en el pago de los distintos tributos estatales y locales.

El Gobierno es consciente de que la vieja redacción del artículo 319 no era útil en un momento como el presente en el que se efectúa una especial llamada a la solidaridad de los ciudadanos en orden a un incremento de la recaudación y que en el caso grave de que se incumplan manifiestamente los deberes fiscales será necesario poner en marcha el aparato coactivo y sancionador del Estado.

Pero también he de destacar que esta nueva facultad punitiva que va a trascender a través del artículo 319 y encomendada a los órganos de la jurisdicción ordinaria, en virtud del ejercicio de acción por el Ministerio Fiscal, se efectúa en límites análogos a lo que constituye el ordenamiento fiscal europeo, es decir, que en ningún modo se han establecido figuras cuya onerosidad sea inferior o superior a la existente en los restantes sistemas legislativos europeos y el tope de los cinco años que como media aproximativa prevalece tanto en los Estados Unidos y en Canadá como en los restantes sistemas fiscales europeos, me refiero al francés, al alemán, al italiano, etc., constituyen también tope necesario del Derecho fiscal español en virtud de esta nueva figura punitiva.

En cuanto al resto de la figura tal como aparecía redactada en el proyecto del Gobierno, ha sufrido perfeccionamientos técnicos introducidos por la Ponencia que han dotado a la figura de una mayor claridad, especialmente en cuanto a la especificación del dolo, de la intencionalidad de defraudación y en cuanto al procedimiento de tipificación de la figura.

En segundo lugar, como medida de apoyo a la reforma fiscal ha de ser considerada la investigación de las cuentas corrientes bancarias. Sé que ésta es una de las figuras que ha sido objeto de mayor debate en la prensa y que quizá sectores interesados en su ausencia han contribuido a crear un clima contrario a la misma, como si el establecimiento de la posible investigación de las cuentas co-

rientes bancarias viniera a lesionar algo que constituya un «statu quo» inevitable del sistema tradicional español.

Quiero decir que con la eliminación de la prohibición de la investigación de cuentas corrientes bancarias, establecida a través del proyecto del Gobierno, la legislación española avanza aquí también un paso más en orden a su equiparación con lo que constituyen las legislaciones europeas que son sus modelos, y que en el procedimiento establecido para la investigación ni se eliminan las garantías necesarias para la actuación de los contribuyentes, ni para la actuación específica mercantil de las empresas afectadas, ni constituye ninguna medida de carácter oneroso excesivo a las demás que contempla el proyecto. Se trata de la eliminación de una barrera más que permite igualar el campo bancario del ahorro y financiero a los restantes campos en cuanto a la actividad investigadora de la Administración Pública. Se trata de eliminar un veto tradicionalmente existente y sin razón ética alguna para existir, a través del cual quien ostenta un bien que integra su patrimonio no debe sufrir limitación alguna tanto si éste tiene el carácter de cuenta corriente como si es una propiedad mobiliaria e inmobiliaria. Con ello se establece una claridad absoluta en cuanto a las situaciones tributarias, en cuanto a cada uno de los distintos elementos integrantes del patrimonio de los contribuyentes.

Con ello el Gobierno consagra una razón más de justicia en cuanto a la tributación. Si han de ser todos los ciudadanos afectados por la reforma fiscal con el conjunto de impuestos que integran el sistema impositivo, y si han de serlo a través de un principio de capacidad contributiva que les llama a gravar, de acuerdo con sus específicas capacidades económicas, lo han de ser sin que exista campo alguno de su actividad que quede ensombrecido por prohibiciones que no deben ser sino simple sombra de un pasado demasiado reciente.

La investigación de cuentas corrientes se establece así de la misma manera como se ha establecido en países europeos. En Francia está establecida como medida de carácter general a través de la cual la administración financiera francesa tiene acceso a la situación

contable bancaria de los contribuyentes afectados.

En Estados Unidos no sólo reviste la incidencia del sistema español, sino que existe un imperativo desde una ley de 1970 que obliga a las instituciones financieras y bancarias a declarar a la administración tributaria toda operación efectuada de tipo transaccional que exceda de la cuantía de diez mil dólares.

En Italia, a través de las reformas operadas en septiembre de 1971 y en octubre de 1973, se ha eliminado igualmente la prohibición de investigación de cuentas corrientes bancarias y se ha establecido con carácter general como facultad de la administración pública. Igual existe en Alemania y en los ordenamientos fiscales de los sistemas europeos.

Eso sí, la Ponencia ha sido consciente de la relevancia que puede tener en este momento concreto el establecimiento de una medida como la que contemplamos, y ha conservado con delicadeza, con cuidado, todas y cada una de las medidas de garantía que venían establecidas inicialmente en el proyecto del Gobierno, celosa de que el secreto de la situación concreta bancaria de los contribuyentes afectados debe tener un solo límite, y es el que afecte más allá de la propia situación tributaria; es decir, en cuanto exceda de los campos necesarios para la actuación de la Hacienda Pública.

Fuera de allí, el respeto sagrado a un principio como es el del mantenimiento de la situación patrimonial ha sido objeto de especial cuidado por la Ponencia.

Como tercera medida que ha de constituir una palanca fundamental para la futura reforma fiscal que hoy aquí empezamos, ha de ser contemplada la situación de regularización voluntaria de la situación fiscal.

El Gobierno ha sido aquí también consciente de un problema político que se planteaba, y era el de la necesidad o no de dar una amnistía como amparo al nacimiento de una situación nueva más libre y transparente en cuanto al conocimiento de las situaciones patrimoniales de los contribuyentes españoles.

Y el Gobierno ha creído (y debo recalcar que la Ponencia ha mantenido por unanimidad el criterio del Gobierno) que no era procedente la concesión de amnistía fiscal alguna para el pasado, sino que debía establecerse la vi-

gencia de lo que constituye nuestro sistema financiero en el momento actual y de lo que ha de constituir nuestro sistema financiero en el futuro. Pero que esta ausencia de amnistía fiscal en modo alguno ha de traducirse en establecimiento de medidas que recorten la posibilidad de que a través de la generosa regularización voluntaria de personas físicas y de sociedades puede tener acceso, en virtud de declaraciones complementarias a la Administración Pública, de lo que constituya la situación real de cada uno de los ciudadanos afectados.

En consecuencia, si bien se elimina la amnistía como principio político en el campo tributario, sí se establece, y así ha sido igualmente ratificado por la Ponencia, la eliminación de las sanciones en cuanto que las nuevas situaciones patrimoniales sean declaradas voluntariamente y conocidas en consecuencia por este carácter por la Administración Fiscal.

Ello va a permitir ajustar en esta nueva hora de la democracia a algo tan importante como es la democracia económica y, sobre todo, a algo tan importante como es el conocimiento real y voluntario efectuado en virtud de declaración expresa de los sujetos afectados de lo que constituyan los bienes y derechos integrantes del patrimonio de cada uno de los ciudadanos españoles. En virtud de una acción voluntaria, de una singular solidaridad en el concreto momento presente, ello va a permitir al Gobierno conocer lo que constituye la real situación fiscal del país en ausencia de lo que constituyan las lagunas y el silencio del pasado.

Por último, como medida complementaria, quiero aludir a la publicación de las listas, respecto de lo cual la Ponencia, acogiendo enmiendas presentadas a este efecto, ha tenido un criterio sumamente generoso en el sentido de admitir una total transparencia de la actuación del sector público, que en el campo concreto tributario en que nos movemos se traduce en una total transparencia en la actuación de la Administración Pública y en la actuación de las declaraciones voluntariamente presentadas a la Administración Pública en cada uno de los impuestos directos que directamente se refieren a cada uno de los sujetos españoles.

Así se ha establecido una obligación por parte de la Administración pública de publicación de lo que constituyen las declaraciones voluntarias en cuanto a bases y cuotas satisfechas, tanto en el Impuesto General sobre la renta como en el Impuesto sobre el Patrimonio, eliminando lo que constituía una prohibición también tradicional del derecho español al amparo de una teoría sustentada sobre la propiedad intelectual.

Ello va a permitir no sólo dotar al sistema fiscal español de una transparencia, sino efectuar una nueva llamada al sentido de responsabilidad de los ciudadanos españoles que sabrán que tendrán acceso, a través de los medios de difusión, puesto que no existe limitación alguna, a las situaciones de defraudación que por sus conductas deliberadas puedan llegar a producirse.

Por último, se integran en el conjunto de medidas que va a contemplar hoy esta Comisión las que constituyen el apoyo fiscal al empleo. Quiero decir aquí que el proyecto del Gobierno establecía, como complemento ideal de esa nueva tributación que originaría una recaudación del orden de 25.000 a 30.000 millones de pesetas, una aplicación específica que dotaba de sentido de justicia a las medidas que hoy se establecían.

Y quiero decir que el criterio de la Ponencia ha sido de total mantenimiento de las líneas del Gobierno e incluso de intensificación del apoyo. Quiero decirlo porque cada uno de los grupos políticos integrantes en la Ponencia, al efectuar su estudio de las medidas sometidas a su consideración, ha sido consciente de la especial gravedad del momento económico español y ha sido consciente, sobre todo, de qué sectores sociales padecen con mayor incidencia la especial gravedad de nuestra situación económica.

Por ello, ha elevado notablemente lo que constituía el apoyo fiscal al empleo, que queda establecido, en virtud del proyecto que la Ponencia presentará a debate y a vuestra decisión, en un 20 por ciento de las retribuciones efectivamente satisfechas en cada uno de los nuevos puestos de trabajo que se creen, 20 por ciento que llega incluso a ser doblado, es decir, que llega al 40 por ciento siempre que los nuevos puestos de creación lo sean en zonas que estén situadas por debajo de

la media de nivel de paro del territorio español.

Y una medida más es que los nuevos puestos de trabajo no han de ser indiscriminadamente creados, sino que, conscientes de lo que constituye la mayor agudeza del problema del paro en el momento actual, ha de referirse a puestos de trabajo creados con remuneraciones que no excedan del doble del salario mínimo; es decir, conscientes de que la actual situación generadora de paro, en cuanto a los sectores menos cualificados en el campo de la actividad económica, ha de merecer una especial protección, un especial apoyo en cuanto a aquellos sectores detentadores de una menor capacidad de trabajo y que ocupan los puestos de peonaje de menor retribución que inciden con mayor volumen en el actual momento en el paro.

Con ello concluyo esto que es la primera ley de la democracia, la primera ley de la libertad y que, sintomáticamente, se ha de referir a algo tan importante como es el establecimiento y consolidación de las bases económicas de la democracia, a través de uno de los varios instrumentos posibles con que actuar en el concreto momento político y económico español.

Quiero presentar, señores Diputados, este proyecto con la misma intención con que lo hizo el Gobierno en el día de su presentación ante el Pleno de esta Comisión, hace poco más de un mes, con la misma idea de que establecía una ley que iba a permitir a los españoles un mayor ámbito de libertad, de justicia y de igualdad. Y quiero decirlo porque ello va a ser, precisamente, una razón que legitime y quizá un título que cualifique esta primera ley de la democracia, porque la democracia empezará por la alteración de la economía.

Por último, quisiera concluir, sin agotar en exceso el tiempo concedido, advirtiendo que me he limitado a la presentación de las medidas de reforma fiscal que han de ser objeto de debate en esta Comisión, sin hacer alusión alguna al conjunto de medidas de naturaleza económica en que han de quedar integradas las de pura reforma fiscal. Y me he limitado a ello, porque soy consciente igualmente de la gravedad del momento económico español.

El Gobierno ha decidido solicitar, de acuer-

do con el Partido de la Unión de Centro, la convocatoria de un Pleno extraordinario de esta Cámara en donde sea presentado el programa económico general del Gobierno y donde sea objeto de debate y contrastación por cada uno de los distintos Grupos políticos que se sientan en esta Cámara.

Precisamente por ello, en atención a que éstas no son sino simplemente medidas a integrar dentro del gran contexto de la actuación económica del Gobierno, la presentación de esta Ponencia ha quedado limitada al primero y más limitado de sus aspectos concretos: aquel que hace referencia a las medidas de reforma fiscal que a continuación van a ser objeto de debate, pero sin que ello quiera decir que hayan de ser excardinadas de su campo general de actuación, sino que éste no ha sido objeto de presentación aquí por serlo en posterior Pleno.

Señores Diputados, en nombre del Gobierno efectúo nuevamente la presentación de este proyecto y solicito para él el mismo voto favorable, unánime o mayoritario, que ha tenido de los distintos grupos a través de la Ponencia, porque soy consciente de que con su aprobación habremos labrado los nuevos Diputados de la democracia una página importante dentro de lo que ha de ser el acontecer político de este país, sustancialmente diferente desde el pasado 15 de junio.

El señor PRESIDENTE: Según el orden fijado corresponde intervenir al representante del Grupo Parlamentario vasco-catalán, señor Trías Fargas.

El señor TRIAS FARGAS: Señor Presidente, señores Diputados, tomo la palabra no tanto para oponerme al proyecto de ley del Gobierno, que en lo sustancial hemos suscrito, como para expresar el punto de vista del Grupo parlamentario que represento en este momento y que inspira nuestra actitud de manera distinta a la que me parece que ha inspirado al Gobierno a la hora de la presentación del proyecto.

Aislar este proyecto de la reforma fiscal urgente —como se le titula— de las medidas económicas que el Gobierno va a tener que presentar, que el Gobierno promete, que el país pide, pero que nunca llegan, va a ser algo

difficil; pero parece que en este punto el Reglamento no permite otra cosa.

Lo que sí quisiera, de todas formas, es indicar de entrada que este proyecto no es simplemente una mejora en el sentido del Derecho Comparado, una especie de puesta al día de cosas que funcionaban más o menos bien y que ahora se perfeccionan, sino que es algo que o tienen una trascendencia política fundamental o no es absolutamente nada.

Entiendo que este proyecto es, o por lo menos debe ser, una ruptura total con el pasado económico y fiscal de este país. Y es en este sentido en el que tiene una auténtica importancia, mucho más que simplemente pensando en las enmiendas particulares que pueden haberse presentado.

De la lectura del articulado que se nos somete debe deducirse que si su aplicación fuera verdad se está, a sabiendas o no de lo que ocurre, a punto de producir un vuelco de 180 grados en el camino de desmoralización económica del país que veníamos siguiendo en los últimos cuarenta años.

En efecto, el proyecto alterará las reglas de juego vigentes en puntos que se sitúan en el corazón del tráfico económico de los españoles, pero, sobre todo, cambiará, o deberá cambiar, nuestras costumbres, nuestros usos sociales, nuestras reglas morales de conducta económica.

Creo poder afirmar con razón que, si la reforma llega a tomar cuerpo, no tanto en la recopilación de nuestra legislación positiva —como ocurre con frecuencia—, sino como el modo de ser de los españoles, ni yo ni ustedes, señores Diputados, ni tampoco nadie fuera de este Parlamento, volverá a ser lo que fue durante tanto tiempo.

No me he pronunciado todavía sobre si los objetivos que persigue el Gobierno son los mejores. Esto es algo que seguramente podría mejorarse, pero está claro que estas medidas pretenden ser un paso adelante en el camino de la regeneración, de la honestidad pública y privada y de la justicia social y nosotros no podemos menos que hacer nuestros aquellos aspectos del proyecto que más se ajustan a estos objetivos. ¿Quién puede oponerse a que se tipifique el delito fiscal o a que se recabe a favor de la Hacienda Pública la colaboración del sistema financiero?

¿O quién dirá que no al intento de que sean los ricos los que paguen proporcionalmente más las cargas sociales?

Estamos claramente en la oposición, pero no vamos a oponernos nosotros, el Grupo Vasco-Catalán, por sistema a las iniciativas del Ejecutivo, ni de ningún otro grupo parlamentario, simplemente porque no sean nuestras. Muy al contrario, las iniciativas que nos parezcan correctas serán apoyadas por nosotros, pero, eso sí, con ánimo de llevarlas a la práctica. Precisamente es en los puntos de coincidencia donde vamos a ser especialmente críticos, pues no se trata de legislar para la galería, sino de asegurar que lo que se promulgue encuentre su aplicación real en el país.

No creo que el proyecto sea lo más eficaz en este sentido, y no me refiero tanto a su articulado, al que nos referiremos más adelante en el momento procesal oportuno, como a su espíritu. Me temo que, si se le sigue al pie de la letra, quede el nuevo texto legal en el gran mausoleo de las numerosas disposiciones del Derecho positivo español que han nacido debidamente en el «Boletín Oficial» para morir muy pronto en el cementerio del olvido de los hombres y de la inoperancia jurídica.

Es sabido que el derecho no siempre tiene una vigencia social completa. Afortunadamente, es cierto, la mayoría de las normas legales gozan de un grado razonable de observancia. El Derecho positivo resulta aplicado sobre todo cuando una mayoría de ciudadanos ajustan voluntariamente su conducta a la norma legal; en cambio, cuando esta observancia resulta psicológicamente en minoría y la observancia de la ley es discutida de manera general y desemboca mayoritariamente en el litigio, la aplicación por vía coactiva, que siempre debe ser un recurso de excepción, no consigue por sí sola imponerse y la efectividad de la norma legal queda inoperante.

Resulta, pues, que la ley que quiere modificar el alcance social de algún tema importante ha de esmerarse en captar este apoyo general; consenso, diríamos hoy día, por su perfección técnica, por lo razonable de sus postulados y por su clara objetividad. Este debiera ser el caso del proyecto que nos ocupa, pero no lo es.

Me permitiré destacar lo que la ley pretende, para que entre todos enjuiciemos, con es-

píritu crítico, la adecuación de los medios a los fines. Empecemos por decir que el preámbulo del proyecto de ley, tanto como su articulado, permiten afirmar que el Gobierno aspira a obtener el apoyo del trabajo organizado. En distintos momentos del texto expresa su deseo de que no sean otra vez los débiles los que siempre en nuestro país carguen con el coste de la operación antiinflacionista que el Gobierno tiene comprometida. No estaría esta aspiración consignada en el preámbulo de la ley, que ello resultaría patente en el Impuesto sobre el Patrimonio de las Personas Físicas que el proyecto introduce de nueva planta en nuestro sistema tributario.

Que no se alarme nadie: no pienso oponerme a esa nueva figura impositiva; pero quiero situar las cosas porque debemos todos hablar claro. Los autores del proyecto no pueden pretender que aceptemos, sin más, la justificación recaudatoria del nuevo tributo. Ellos mismos han estimado comprobable una recaudación no superior a los 20.000 millones de pesetas por este concepto.

Pues bien, el presupuesto, para no ser inflacionario, habrá de cerrarse equilibradamente. Pero, para que este equilibrio no aumente el desempleo, tendrá que cerrarse por encima de los niveles actuales de gasto, y a base de aumentos ingentes en la recaudación. Estos niveles presentan un déficit en este momento de 150.000 millones de pesetas o cifra parecida. La recaudación del nuevo impuesto es una simple lágrima en el mar inmenso de nuestras necesidades y nadie podrá pensar realmente que se implanta el nuevo impuesto por necesidades de recaudación.

Por otro lado, tienen que decirse, y tenemos que aceptar, que éste es un impuesto discutible, discutido en el Derecho Comparado, que es minoritario en la mayor parte de los países y que, en definitiva, no es una figura fiscal de general aceptación que realmente España estuviera en mora de aplicar.

Señores Diputados, hablemos claro. La única justificación sería del Impuesto sobre el Patrimonio es política. Se quiere convencer al país de que esta vez los ricos van a pagar, y en este sentido se introduce una figura impositiva nueva y llamativa. Yo soy poco partidario de la demagogia y menos aún en materia fiscal. Pero esta vez estoy de acuerdo con el

gesto. El país merece un signo externo, claro y visible, indicativo de que el mundo ha cambiado. Desde ahora pagarán impuestos los que tengan capacidad para ello. Esto es lo que el proyecto dice y lo que está bien que se diga.

Otros impuestos serían más idóneos a estos efectos. Pero la identificación en la opinión popular de la riqueza acumulada con la capacidad de pago y la misma novedad entre nosotros de este ataque frontal al poder económico tiene unos efectos psicológicos entre la clase trabajadora que en el momento actual pueden ser eficaces.

A esta misma categoría de psicología de las masas obreras debe adscribirse el apoyo fiscal al empleo que el propio proyecto contempla en su capítulo IV. Técnicamente hablando, la experiencia internacional que hay sobre esta fórmula permite decir que sus resultados son flojos. Incluso llevando su cuantía al 20 por ciento y más del sueldo del asalariado, como hace la Ponencia, más que nada para borrar de la mente de todos la cifra irrisoria de 25.000 pesetas por cada empleo incrementado, que es lo que contemplaba el proyecto.

Yo he de decir, sintiéndolo mucho, que muy pocos serán los nuevos puestos de trabajo que se creen al amparo de este apoyo. Porque con tanto repartir palmadas en la espalda de unos y otros nos hemos olvidado de la clase media, que es la que ahorra, y de los empresarios, que son los que invierten, creando los puestos de trabajo. Si hay que estimular a unos había que hacer lo mismo con los otros.

Permítanme que dé un paso atrás para recordar verdades que a veces se olvidan. En efecto, mientras no pasemos al capitalismo de Estado, que tal vez algunos andan buscando, el sistema económico necesita para funcionar el acuerdo básico entre el empresario y el trabajo organizado, al que puede contribuir el Poder Ejecutivo si no comete más tonterías de las inevitables.

Ahora bien, la empresa existe en cualquier sistema económico que se escoja, y lo mismo puede decirse del factor trabajo. Lo que cambia de un supuesto a otro es el grado de libertad con que el empresario puede invertir y el trabajador se puede organizar y actuar en defensa de sus intereses. Y correlativamente, lo mismo ocurre con el grado de autoritarismo

con que el Gobierno interviene según sea el sistema. Parece que hoy por hoy una mayoría de españoles —por lo menos es lo que dicen nuestros políticos en la televisión— están dispuestos a mantener un sistema económico de libertad de iniciativa. Creemos que a pesar de los pesares es más creativo que las demás posibilidades. Eso sí, queremos poner toda esta mayor creatividad al servicio de la justicia social. Y es que no podemos olvidar que este sistema se base en la acción voluntaria de unos y de otros.

Pues bien, si esto es así, nos parece muy bien que el Gobierno calme los ánimos y estimule la cooperación del trabajo, uno de los soportes del trípode, gravando a los ricos y ofreciendo dinero para el nuevo empleo. Pero el Gobierno debe saber que su programa económico no puede operar sin el apoyo del empresario. Sin inversión nueva no habrá puestos de trabajo nuevos ni mercaderías que exportar, ni atacaremos el alza de precios por la única vía razonable a medio plazo, que es el aumento de la oferta. Dicho de otro modo: sin inversión habrá paro, habrá alza de precios y nos quedaremos sin divisas. Estos son hechos que ninguna legislación que los ignore podrá soslayar.

En este momento, señores Diputados, llevamos dos años con tasas negativas de inversión privada y en este ejercicio acentuaremos, desgraciadamente, la tendencia, según todas las previsiones. Por aquí nos llega el paro.

¿Por qué no invierte el empresario? El empresario no invierte porque con tasas de inflación superiores al 30 por ciento, como es la nuestra en este momento, la rentabilidad interna que debe justificar toda inversión es difícil de calcular y, en todo caso, imposible de obtener.

Pero, sobre todo, el empresario no invierte, y me refiero a los centenares de miles de pequeños y medianos hombres de negocios más que a los gigantes nacionales e internacionales, que suelen quedar inmunes a los peligros de la vida económica, porque está cansado de perder dinero. No puede aguantar porque su tesorería exhausta le ahoga. Unos costes de producción alocadamente en alza, unas dificultades crecientes en la colocación de sus productos, la disminución precipitada de sus márgenes de beneficio y de sus excedentes

industriales le llevan inexorablemente a la ruina. Y como premio de todo ello, su prestigio social baja cada día. Cuando un periodista se levanta por la mañana sin tema, escribe algo contra la figura del empresario, que procura desprestigiar sin que nadie sepa exactamente por qué. En cambio, nuestro empresario, cuando se levanta a las siete de la mañana, no sabe si su empresa será confiscada, colectivizada, autogestionada o nacionalizada o simplemente arruinada por factores externos a su voluntad. Tampoco sabe si ese día su autoridad será mantenida, recortada o suprimida. En definitiva, no sabe si la empresa va a ser suya mañana, pero le consta que las pérdidas y el pago de la nómina y de los créditos usuarios corren de su cuenta en todo caso. Pero cuidado, que esto no es todo. A través de este proyecto le anunciamos que sí, entre tantos agobios, resbala por un momento dará con sus huesos en la cárcel para unos cuantos años por fraude fiscal. ¿Quién va a invertir en esas condiciones? ¿Quién va a ampliar su empresa ahora? Es más: ¿Quién puede o quiere ahorrar en esta situación? Nadie. Me parece que está claro, señores Diputados, que absolutamente nadie.

En este proyecto de ley, que marcará un hito en el cambio de nuestra vida fiscal y financiera y que, sobre todo, es un gesto psicológico de renovación y justicia para tantos españoles, me parece que era el momento de decirles a los empresarios que se contaba con ellos, que el ambiente no les era hostil, que tenían un lugar en el sol de España. Señores Diputados, ni una palabra ha sonado en este sentido.

Cuando el señor Ministro de Hacienda nos presentó su proyecto hace unas semanas, intenté hacerle algunas indicaciones en este sentido que despachó con su habitual desenfado, como preocupaciones de un académico. Nos dijo que el empresario lo que tenía que hacer era limitarse a colaborar en la lucha contra la inflación y dejarse de críticas poco pensadas. De ahí a invitarle a cerrar el pico porque cualquier otro Gobierno sería peor, como ha hecho el señor Ministro de Trabajo, media poco. Pues bien, supongo que el señor Ministro de Hacienda cuenta con el apoyo de su partido. Me imagino, en cambio, que no disfruta de excesivas simpatías entre los tra-

bajadores. Pero puedo asegurarle que, a este paso, pronto dejará de contar con la confianza de los empresarios.

Ustedes me dirán qué posibilidades tiene de sostenerse el trípode de la política económica del Gobierno si le fallan los empresarios y los trabajadores simultáneamente. Creo que es justo decir que ninguna.

A lo mejor, una flexibilidad en las plantillas, limitada a un 5 por ciento de las mismas, a cambio del seguro permanente de desempleo, con los primeros cinco años del mismo a cargo de las empresas, podría ser un primer paso en la vía de la inversión, de la productividad y, por ende, de la recuperación.

Existen otras fórmulas que compaginan la justicia con la eficacia. Tenemos que pensarlo entre todos, porque lo que está claro es que hay que hacer algo en este sentido.

Tenía aquí algunas observaciones de carácter técnico acerca del Impuesto sobre el Patrimonio, pero me temo que me estoy alargando demasiado y las dejaremos para el momento de las observaciones concretas sobre enmiendas determinadas.

Ahora quisiera decir que hay otras cuestiones que me interesa destacar en esta intervención preliminar, que son las relativas al delito fiscal que configura el capítulo VI, y al deber de colaboración con la gestión tributaria que se impone al sistema bancario español al suprimir la práctica del secreto bancario, capítulo VIII.

Creo que estas dos medidas complementarias entre sí son las dos novedades que marcan un cambio más drástico en los usos sociales y fiscales de todos nosotros, a que me refería al principio de mi intervención.

Empecemos por decir que el fraude fiscal es un acto de insolidaridad social de graves consecuencias en muchos sentidos. Priva, en primer término, al Estado de los ingresos necesarios para atender a los gastos dirigidos a ayudar a los más débiles, produciendo unas desigualdades sin justificación moral ninguna. Además, en general el fraude se produce con más facilidad en las rentas más altas, no tanto porque los ricos estén más inclinados a la delincuencia, sino porque tienen más oportunidad. Sea como sea, el hecho es que el fraude agudiza la regresividad del sistema

fiscal y atenta a la justicia distributiva de una manera directa.

Es más, la información estadística que en muchos países deriva de la información tributaria carece de todo sentido entre nosotros, dificultando la política económica y el análisis de la situación por parte del Estado. Ello dificulta, como es evidente, el conocimiento de nuestra realidad económica y, por ende, el diagnóstico y la terapéutica de nuestros males. Y tal vez lo más grave es que el fraude fiscal generalizado hace ilusoria la política fiscal. ¿Cómo sancionar cierta actividad que se quiere desalentar aumentando una tarifa tributaria, cuando el contribuyente oculta la base? ¿Cómo incentivar otra clase de conducta eximiéndola del pago de ciertos impuestos, si el sujeto pasivo ya estaba exento total por la vía de la defraudación?

Les habla un convencido de que mientras la defraudación exista no tendremos un Estado moderno, ni una sociedad solidaria y, por ende, la democracia no será posible entre nosotros. Siendo así que, a mi juicio, la defraudación fiscal generalizada es la lacra singular más grave de las que aquejan a nuestra conducta económica, mal podría oponerme a la tipificación del delito fiscal y a la supresión del secreto bancario, sin lo cual la inspección de tributos poco podría hacer.

Me declaro, pues, que quede claro, partidario en principio de los capítulos VI y VIII del proyecto que establecen el delito fiscal y suprimen el secreto bancario.

Lo único que quisiera es expresar a los señores Diputados mi preocupación por cierto regusto primitivo, por un algo de tremendismo, por una cierta demagogia que me parece detectar en el texto del proyecto. No se olvide que estamos pasando de una situación de autoritarismo a otra de libertad. Pero no olvidemos tampoco que para sobrevivir en una y otra hacen falta, afortunadamente, morales distintas, y las morales no se improvisan. Del mismo modo que en la era franquista el Estado llevaba la bandera y marcaba el paso de la inmoralidad colectiva y de la corrupción pública, el nuevo Estado debe llevar al país en dirección diametralmente opuesta, encaminándole hacia la decencia individual y social.

El Estado en general, y la inspección de los tributos en particular, no deben presentarse como los enemigos del contribuyente que han sido hasta ahora; enemigos en unos casos, colaboradores ilícitos en otros. Un inspector no debe alegrarse, pongo por caso, de que por error el contribuyente pague más de lo que debe, como ocurre a veces hoy día; le debe advertir de lo que haga al caso para, de esta manera, demostrarle su objetividad y captar su confianza. En régimen democrático el funcionario y el ciudadano deben ayudarse amistosamente en aras de la mejor e inexorable observancia en la ley democrática. Aquello de que entre pillos anda el juego y de que quien roba a un ladrón tiene cien años de perdón es algo extremadamente negativo, que desgraciadamente ha regido entre nosotros durante demasiado tiempo.

Por esto, señores Diputados, queda claro que las reformas son de fondo; no es simplemente un retoque legal, un retoque político para ponernos al día de tal o cual país. Se trata de algo que requiere tiempo y esfuerzo, porque va al fondo de cada uno de nosotros y al conjunto de todos nosotros. Hay que establecer una etapa de reeducación que el Estado debe presidir y dirigir con su autoridad y, sobre todo, con su ejemplo. No habrá moral en el pueblo si no la hay en el Estado.

Por ejemplo, cuando se produce un cambio importante en las instituciones de un país, así sea incruento como éste, hay que dar tiempo para adaptarse a la gente, que vio aceptada y casi elogiada una conducta ante el fisco diametralmente opuesta a la que ahora vamos a exigir. Los primeros defraudadores, muchas veces, eran los que se situaban al frente del Estado. ¿Por qué íbamos a pagar los demás? Pero aún hay más: entre alimentar el erario del régimen franquista para pagar gastos con los que no estábamos de acuerdo, o dar un dinero a la oposición clandestina o a un poeta de la protesta, pongo por caso, ¿qué resultaba mejor considerado, que era objetivamente más moral y más decente para el contribuyente español?

No me sabe mal decir que una amnistía fiscal clara debía de haber presidido el proyecto que estudiamos, precisamente porque tenemos que insistir en que el cambio va a

ser radical y no estamos tratando de poner un parche que se solucione con una moratoria más o menos vergonzante. Pero la realidad, después de la amnistía, debería ser inexorable, cosa que está de momento por ver.

La ley, precisamente, en vez de comprender esta situación de cambio es en algunos momentos, como veremos después, incluso revanchista. Otra cosa es que viniera aquí luego, señores Diputados, un proyecto de ley con el propósito de examinar los orígenes de ciertos patrimonios, castigando, en su caso, las fortunas mal habida por ser producto de contubernios inmorales entre los trepadores del dinero y los detentadores del poder político autoritario durante los últimos años. Si este proyecto de ley se presenta, seguramente contará con mi voto.

Pero ahora estamos hablando de los españoles en general, y esto es una cosa muy distinta. El Estado español, y más el Estado democrático, tiene la obligación de considerarnos a todos los ciudadanos gentes decentes mientras no se demuestre lo contrario. Más vale que se escapen diez culpables a que se condene a la cárcel a la humillación y al deshonor a un solo inocente. No desacreditemos, de entrada, un texto legal que debe hacer suya la confianza de todos los españoles, a base, sobre todo, de su exquisita ponderación. ¿O es que todos los españoles somos delincuentes comunes y así se nos va a tratar?

En general, tendemos a imaginar al defraudador fiscal como un desaprensivo obeso, de chistera y mucho puro habano. Pensemos, por un momento, en otra clase de defraudador: un empresario modesto que ha invertido todo su pecunio familiar en una empresa que está en crisis y no gana, no pagando alguno de sus impuestos para atender un efecto o la nómina y evitar la suspensión de pagos, y que, además, sabe que su competencia está haciendo lo mismo. Ahora, este hombre, en este sálvese quien pueda, sabe que le puede costar la ruina y seis años de cárcel, según el articulado de la Ponencia. Y todo ello de golpe y porrazo, de hoy a mañana, sin casi tiempo para pensar, ni menos prepararse para cambiar de conducta.

¿Estamos seguros de que esto es lo que pensamos hacer, de que ésta es la pena que

queremos aplicar sin preaviso? ¿O es que ya de entrada la norma legal se va a separar de su aplicación? Porque esto es lo que va a ocurrir si no entramos por caminos de sensatez. A la desesperada, la gente se va a liar la manta a la cabeza y va a seguir como antes. La aplicación pacífica y general de la ley, a que me refería al principio, no tendrá lugar.

Es cierto que la evasión fiscal se suele practicar en España más que en países similares al nuestro. ¿Es que somos gente especialmente inclinada al delito? En tal caso, será una inclinación muy especializada, porque ni homicidios, ni robos, ni violaciones ofrecen en España estadísticas mucho peores que las de otros países comparables. Me parece, ya lo he insinuado hace un momento, que las cosas son más complejas. Para que un ciudadano comprenda que debe pagar sus impuestos y se sienta moralmente obligado a ello, el Estado debe ser respetable y hacerse respetar.

Es preciso que el contribuyente pueda intervenir en la determinación de los ingresos públicos y en la orientación de los gastos públicos a través de un Parlamento, cosa que no ha podido hacer con regularidad desde hace casi medio siglo. Hace falta, ante todo, que los Presupuestos Generales se discutan, aprueben y fiscalicen por parte del pueblo. De otra forma, su fuerza moral de obligar es nula, y por eso, sobre todo, nadie se ha tomado en serio en España la obligación de pagar impuestos.

Es preciso que el contribuyente tenga la sensación de que se le va a tratar justamente y de que la Administración Pública administrará los caudales de la Hacienda con eficacia y honestidad. Desgraciadamente, es bien sabido que nada de esto ha sido en el caso de España, o lo ha sido muy poco, durante tanto tiempo como recordamos todos nosotros.

Yo me atrevo a decir que el Estado no merecería el respeto de los ciudadanos y por eso la defraudación fiscal se generalizaba, al no sufrir la desconsideración general ni la censura social que la castigan en las democracias de otros países.

Y esto, señores Diputados, no se va a arreglar con imponerle a media España cadena perpetua. La gente dejará de defraudar si el

Estado ejerce la debida vigilancia a través de la inspección y el contribuyente sabe que le esperan sanciones serias, pero no desproporcionadas. Pero, sobre todo, los españoles dejaremos de defraudar el día que veamos que el Estado cambia de conducta y se pone a las órdenes del Parlamento, programa leyes generosas y altruistas, pero a la vez posibles y justas con todos y, en todo caso, administra los fondos públicos con eficacia. Mientras esto no se produzca, los españoles seguirán defraudando. Insisto en todo esto porque nuestro Estado no lleva trazas de enmendarse.

El artículo 44 del proyecto que estudiamos establece la facultad de inspeccionar las operaciones de Banca a partir del día 11 de julio último. O sea, que se suprime el secreto bancario, cosa que me parece bien, pero se viola el principio venerable de la retroactividad de las leyes, sobre el que descansa el Estado de Derecho. Y la Ponencia, señores Diputados, mantiene el desaguizado.

¿Es que realmente será necesario, señores Diputados, que recordemos aquí que para que el Derecho sea Derecho debe ser conocido por todos los que hemos de cumplir la ley? Parece que sí, aunque ahora damos al traste con este principio jurídico de la irretroactividad de las leyes, que le ha costado al pueblo siglos de lucha conseguir. ¿En qué queda la seguridad jurídica si empezamos a legislar para el pasado y no para el futuro, como debe ser? Y no es que el caso concreto que me ocupa sea lo que en este momento me angustia. Lo que me angustia es que en esta vida nueva que empezamos ahora, ya desde el primer día el ciudadano pueda ver de nuevo al Estado español como enemigo emboscado que, prescindiendo de las reglas del juego de carácter inmemorial, sorprende arteramente al ciudadano a la vuelta de la esquina.

¿Que así no se escapará ningún pillo? Tal vez. Pero será a costa de haber perdido de nuevo la Administración Pública su prestigio y su credibilidad.

Señores Diputados, no quiero insistir más, pero creo de veras que hemos de velar por la imagen de nuestro Estado si queremos que un día impere la libertad en el orden, que otra cosa no es la democracia. Un Estado

que no respeta los principios del Derecho no es un Estado de Derecho, y un Estado que no sea de Derecho no tiene autoridad moral para pedirnos que le apoyemos económicamente.

Antes de acabar, en un minuto quiero referirme a una enmienda que presentó la mayoría vasco-catalana, en el sentido de pedirle al Estado que nos informe sobre los gastos públicos, sobre la aplicación de este dinero que de proyecto pretende recaudar. Esto es técnicamente algo claro y conocido...

El señor PRESIDENTE: Ha concluido el tiempo. Señor Trias Fargas, ¿en un minuto puede terminar?

El señor TRIAS FARGAS: En un minuto y medio. *(Risas.)*

El Estado debe decirnos en qué va a gastar el dinero, pues de otro modo no podremos saber realmente cómo juzgar estos ingresos. Como norma general se aduce ahora que es una medida de urgencia y, por lo tanto, no podemos hablar aquí de gastos. Pero si ha habido urgencia para pedir dinero, no veo por qué con la misma urgencia no se nos puede decir los gastos a que va a ser destinado este dinero. Porque lo que queremos nosotros es que este dinero se dedique a mantener un seguro, un subsidio de paro permanente para todos los españoles y sin limitación en el tiempo, sin perjuicio naturalmente de que se observen y controlen los abusos posibles, pero que sea capaz de suprimir la angustia de la gente que no tiene trabajo. Por eso exigimos y pedimos que se nos informe del gasto a que se van a destinar los ingresos del proyecto.

Y, por último, creo que este proyecto va a ser algo importante si nosotros queremos que lo sea, si queremos que cambie la psicología del país. Pero he de decir que técnicamente no reúne las condiciones para todo ello. Es un gesto psicológico que podría haber sido importante si se hubiese dirigido a todos los españoles, pero no ha sido así; se ha dirigido tan sólo a una parte.

Quiero advertir que, en el futuro, nuestro deseo de colaboración expresado en el apoyo a la redacción de la Ponencia no puede entenderse por parte del Gobierno como un cheque en blanco para cualquier otro proyecto que

pueda llegar a este hemiciclo. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Corresponde intervenir al Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra el señor Barón.

El señor BARON CRESPO: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, en este desproporcionado escenario vamos a ver hoy la primera propuesta concreta que ha hecho el Gobierno a estas Cortes democráticas. Se podría decir que casi se trata de una excepción en la política parlamentaria que se ha seguido hasta el momento. Y se trata también de la única medida económica que se nos ha presentado y que hoy, de nuevo, el Ponente del Gobierno nos trae como una medida anticrisis.

Nosotros, desde el punto de vista de la lucha anticrisis, pensamos que es mejor esperar, para discutir las medidas urgentes de reforma fiscal en el debate que se promete para dentro de quince días, debate paradójico, porque debe ser el primer caso en la historia en que, en un Parlamento democrático, el Gobierno presenta su programa tres meses y medio más tarde de haber sido constituido. En este sentido, pensamos que hubiera sido más claramente favorable para el país en su conjunto que se hubieran cumplido las promesas iniciales.

Pensamos, con el que entonces era profesor Fuentes Quintana, en declaraciones hechas el 8 de junio, que el Gobierno debería haber comparecido a las Cortes con ese programa. Decía también Fuentes Quintana que el programa fuera aprobado en el Parlamento y que el Gobierno se presentase públicamente a las Cortes para dar cuenta de su marcha. Pero decía más: «Veo otra alternativa, la existencia de una Comisión de encuesta y vigilancia del programa a partir de las propias Cortes, de manera que los partidos puedan seguir su evolución y pedir información sobre la actuación del Gobierno; no se puede pensar en otros organismos que funcionen para ello, ni el Consejo de Economía Nacional ni otros. Hay que moverse en cauces estrictamente políticos. Comprendo que eso es poco, pero no veo otra alternativa. En definitiva, diría que lo que hace falta es un pacto

político para salvar la economía, al mismo tiempo que se negocia la Constitución».

Creo que está suficientemente claro. Lo que es incomprensible es que hayamos pasado tres meses sin que el Gobierno haya venido a presentar ese plan de conjunto, que no solamente se compone de unas medidas de reforma fiscal.

En cuanto al texto concreto del proyecto de ley, como ya se ha expuesto aquí, creemos que contiene básicamente tres grandes bloques de medidas. Por una parte, las que se pueden reagrupar bajo el título de medidas para recaudar más; por otra, las medidas que suponen una mejora en la administración tributaria y, por último, las de apoyo al empleo, que, en cierto modo, están incluidas dentro de la sensibilidad de la opinión pública respecto al tema.

La valoración de los socialistas sobre el proyecto en su conjunto es algo que ya hicimos el 9 de agosto ante el Ministro de Hacienda, y estamos de acuerdo en que muchas de estas medidas no son medidas de programa político de partido concreto, sino que marcan, en cierto modo, una convergencia de la sociedad española. Sin embargo, pensamos que habiéndose escogido en muchos casos unos rótulos positivos para la defensa de clientela electoral por parte de la Unión de Centro Democrático, esto le ha llevado en gran parte a vaciar de eficacia práctica estas medidas.

Voy a ir examinando uno por uno todos los puntos que se relacionan con la postura que hemos seguido los socialistas en la Ponencia, es decir, con las enmiendas presentadas, y en este sentido es significativo que el Partido Socialista Obrero Español y los Socialistas de Cataluña hayan presentado aproximadamente el mismo número de enmiendas al proyecto de ley que la Unión de Centro Democrático, que en principio debía defenderlo.

Nos encontramos —y esto se ha visto en el trabajo que hemos hecho durante más de un mes— con que no ha habido ninguna política de obstrucción por parte de ningún grupo político. Ha sido un trabajo de mejora del proyecto, lo que se ha repetido además en otro tema que está forzosamente relacionado con éste, no sólo porque entre dentro de

esta misma Comisión, sino porque se refiere a los gastos de los dineros públicos, cual es concretamente el de los créditos extraordinarios y suplementos de crédito que actualmente están en la Comisión. En ambos casos hemos seguido una política consistente en acelerar al máximo los trabajos, porque somos conscientes de la importancia de los proyectos, pero ello sin demérito de la necesaria crítica y las mejoras técnicas y políticas de los mismos proyectos.

Respecto al primer bloque de medidas para recaudar más, hay una que es el Impuesto del Patrimonio. Nosotros vemos que el Impuesto del Patrimonio es una medida positiva en principio, cuyo objetivo es hacer un censo nacional de la riqueza y que podría justificarse a partir de la contribución a las cargas por la colectividad, no sólo por la renta que se obtiene, sino también por la riqueza. Claramente es un impuesto declarativo y además un impuesto de minorías. Siento corregirle al señor Ponente Rodríguez Miranda cuando habla de su escaso interés recaudatorio, porque en Alemania, por ejemplo, no es el 0,9, es el 2,4. De todas maneras seamos conscientes que no es un impuesto de recaudación básicamente; es un impuesto que permite establecer un censo de la riqueza y que incluso establecido con un suficiente valor catastral se podría suprimir.

En España, el proyecto, por vías indirectas —eso está en la memoria del proyecto de ley—, habla de que hay una riqueza de 18 billones de pesetas, o de dieciocho billones trescientos treinta y cuatro mil millones. La recaudación al máximo no va a pasar con mucho del 0,02. Sin embargo, si examinamos la distribución del patrimonio (y eso está también en el estudio hecho a partir de los cálculos Alcaide y otros), en España el 1 por ciento de la población concentra el 6 por ciento de la riqueza, y el 20 por ciento de arriba concentra el 49 por ciento de la misma. Esto justifica ya la creación del impuesto, porque, por otra parte, tenemos que el 20 por ciento de familias que tienen rentas inferiores concentran, aproximadamente, como máximo, un 5 por ciento de la riqueza.

Nosotros pensamos además que el impuesto sobre patrimonio debe incluirse dentro de

una reforma de conjunto de la fiscalidad, porque hay que contemplar muchas cosas que no están contempladas dentro de esta figura transitoria que se ha creado. En este sentido, nos parece importante que el Gobierno presente un proyecto completo de impuestos sobre el patrimonio, tal como se ha comprometido, y no ceda a la tentación de considerar definitivamente discutido el tema.

Consideramos básica, por otra parte, la imposición sobre el capital no productivo; la protección del ahorro popular, que es un complemento importante; el considerar y estudiar la participación de los trabajadores en los activos; la reforma del impuesto sobre sucesiones...

Y esto tendría sentido además con un impuesto del patrimonio que respetara algo que estaba en el proyecto de ley inicial del Gobierno; es decir, que se impusiera también al patrimonio de las personas jurídicas. Sobre este tema el Partido Socialista ha mantenido su enmienda que defenderá más adelante —no voy a entrar ahora a fondo en ello—, pero anticipo que hay razones de justicia para luchar contra el fraude y razones también de conocimiento fiscal que justifican sobradamente algo que existe ya en otras legislaciones.

En segundo lugar está como medida recaudatoria el I. R. T. P. Aquí nos encontramos, señores Diputados, con lo que se puede llamar la niña bonita del sistema fiscal español, porque aquí, en esta misma Sala, se ha hablado, y se habló en la sesión informativa con el Ministro de Hacienda, con gran regularidad del fraude fiscal como un deporte generalizado de los españoles. Nosotros nos oponemos a esa afirmación, y lamento que se haya ausentado el señor Trias Fargas que nos ha hablado de la defraudación fiscal como un medio de lucha antifascista. Yo no he visto nunca, y he estado procesado, que entrara eso en los cálculos de la oposición democrática, porque nosotros, al tiempo que luchábamos por la libertad continuamente, también exigíamos una reforma fiscal y que cada uno cumpliera con sus obligaciones. Prueba de ello es la valoración absolutamente negativa que tenemos del momento actual y la evolución reciente.

En los últimos diez años, el I. R. T. P. ha pasado de recaudar doce mil millones de pesetas a suponer en este año —se prevé que más o menos— ciento setenta o ciento ochenta mil millones. Es decir, se ha multiplicado la recaudación por catorce, o algo más, y el año que viene se espera recaudar doscientos veinte mil millones. En la renta de sociedades nos encontramos con que en el año 1967 se recaudaban dieciocho mil millones; en este año se prevé una recaudación de ochenta mil millones, es decir, que se ha multiplicado por cuatro. En el impuesto sobre la renta de las personas físicas, en el año 1967 se calculaban unos dos mil quinientos millones, y en este año se prevén los diez mil millones; es decir, que se ha multiplicado por cuatro. En este sentido, queda absolutamente claro que no hay un tratamiento igual de todos los ciudadanos: hay un impuesto que es por el que más se recauda, el que pagan los asalariados, fundamentalmente los trabajadores, que es el impuesto que se ha convertido en absolutamente clave de todo el sistema fiscal español, cual es el caso del I. R. T. P.

Nosotros, cuando se plantee la revisión general de la imposición directa (y esto, ahora, agradecemos que se consideren como criterios de la Ponencia alguna de las enmiendas que nosotros hemos planteado), seguiremos manteniendo un criterio discriminatorio, porque pensamos que es necesario revisar los mínimos exentos, como pensamos también que hay que ir a una imposición progresiva de los salarios y de las rentas, porque hay que tener en cuenta que aquellos que cobran más de 800.000 o un millón de pesetas (nosotros establecemos el límite actual en 750.000), a partir de estos niveles la defraudación se acelera en progresión geométrica, hasta el punto de que, si miran la memoria del proyecto de ley, nos encontramos con que sólo 29.000 ciudadanos en este país ganan más de dos millones de pesetas.

Incluso es paradójica una modificación del proyecto de ley inicial, que iba en el sentido que proponíamos nosotros, encontrándonos con que la memoria del proyecto de ley habla precisamente de gravar a los ciudadanos de más de 900.000 pesetas. En este sentido consideramos que se debe mantener la postura

inicial, porque es expresiva realmente de la solidaridad entre los que trabajan y los que están parados y va en un sentido de redistribución que nos parece positivo.

Hay otro capítulo en el cual manteníamos una postura de corrección en principio general y hemos añadido un bien concreto, los automóviles, con respecto a los cuales mantenemos una grave reserva, que es el impuesto sobre el lujo. En el terreno fiscal se hacen grandes declaraciones y se acaba yendo a tiro hecho, es decir, se acaba yendo al socorrido I. R. T. P., la gasolina, bebidas y tabaco. En este caso nos encontramos con que ha habido una modificación en la Ponencia, que partió de nosotros y nos pareció positiva, que es la elevación de precios en origen con respecto al vino. Pero nos parece que el impuesto sobre el lujo es una de esas figuras que debían ser absolutamente reconsideradas por su carácter eminentemente regresivo en conjunto.

Actualmente nos encontramos en España con que no sólo las bebidas normales, sino, por ejemplo, deportes y electrodomésticos siguen siendo artículos de lujo muy gravados y, sin embargo (y ésta es otra de las dificultades del sistema actual, incluso en la elaboración de leyes), los cotos de caza, las residencias secundarias y cosas de este tipo no tienen ninguna clase de impositiva real.

Otro aspecto del proyecto de ley, que va en el sentido de la mejora de la Administración, es el problema de la regularización voluntaria. Nosotros, en principio, pensamos que la única justificación de la regularización voluntaria es que se ponga en regla lo que se debe de poner de una vez para todas. No hay más justificación técnica.

No pensábamos hablar de la amnistía, porque nos parece que el tema de la amnistía total es la superación y esto, viniendo del griego, es el no me acuerdo. Nos hemos olvidado de que es algo que el Parlamento debía aprobar como un acto de manifestación de la soberanía nacional, pero el asimilar la amnistía a este terreno tiene muchos peligros porque, en el caso de la regularización de balances, hay figuras muy aproximadas a la amnistía. Creemos, a la hora de examinar las grandes fortunas, como proponía el señor

Trías Fargas, que es muy peligroso el hablar de las motivaciones por las cuales se han hecho las grandes fortunas, porque creo que en la Historia no hay ninguna gran fortuna sin alguna mancha en su origen. Es enormemente peligroso el tema. Pero considerar determinadas responsabilidades políticas sí nos parece importante, sobre todo no en relación con una revisión general del pasado, sino en relación con situaciones que existen y que creemos deben normalizarse. Incluso en la contemplación del gasto público de cara al próximo año y a los próximos Presupuestos.

Quedan dos figuras dentro de lo que se podrían llamar medidas para el aumento de la recaudación y de moralidad fiscal de la sociedad española, que son el delito fiscal y el secreto bancario. En el tema del delito fiscal nosotros hemos tenido un criterio eminentemente técnico. Creo que la izquierda en general y los socialistas no hemos pretendido hacer una casa de patronos pillados en falta. Creemos que las normas del Código Penal (que tan bien conocemos en muchos aspectos, por lo menos en los políticos) no deben ser enormemente represivas; debe de haber una elevación en el nivel de la moralidad social. Sin embargo, es peligroso hacer demagogia con el Código Penal español en la mano, porque me parece difícil que un pequeño o mediano empresario pueda defraudar de golpe diez millones de pesetas, pero nos encontramos con un Código Penal que prevé penas de reclusión para hurtos de más de 100.000 pesetas. Si los Diputados quieren hacer una lectura del Código Penal verán que nos encontramos con penas absolutamente desproporcionadas. En ese sentido nos ha parecido muy positivo que la Ponencia, en conjunto, al considerar el tema del delito fiscal plantee al Gobierno una moción para revisar el Código Penal español, porque tiene aspectos realmente bárbaros al lado del tratamiento que puede dar al delito fiscal. No nos parece en este sentido que se trate de penas desproporcionadas, sino todo lo contrario.

En cuanto al tema de la aplicación y necesidad de un tiempo de preparación es evidente que siempre hace falta tiempo para prepararse, pero para ducharse con agua fría hay que meterse de repente. No se puede estar

desde el punto de vista de técnica legislativa democrática diciendo durante tres años que hay que hacer una ley; debe ser discutida por los representantes del pueblo y aprobada una ley en relación con las normas generales que existen en la sociedad y con lo que debe ser un equilibrio de poderes y también de sanciones de conductas condenables.

En conjunto, y dejo aparte el tema del apoyo al empleo que a los socialistas nos parece importante, nosotros, dentro de que hemos mantenido en todos los capítulos de la ley enmiendas, porque creemos que esta ley debe ser efectiva, la valoración de su aplicación la relacionamos con dos cosas: una, con lo que va a ser el comportamiento real de las clases poseedoras en este país. En este sentido me van a permitir que cite una reflexión que hizo un político que ciertamente no fue muy amigo de los socialistas, reflexión que hizo Calvo Sotelo, el que fue Ministro de Hacienda del dictador Primo de Rivera, y esto demuestra que los cirujanos de hierro muchas veces no resuelven los problemas. Después de los problemas del año 1926, ante la fuerte oposición de los latifundistas cuando se planteó la reforma de la declaración de la riqueza imponible, decía: «Muchas veces he pensado que la receta de nuestros males, por ser de índole económica, se ahogará en gran parte ante el quietismo obstinado de las clases conservadoras. La incompreensión egoísta de multitud de ciudadanos pudientes, aferrados a nociones quirritarias, cual si viviésemos muchas centurias atrás, puede depararnos días desastrosos...».

No quiero ser agorero, pero sí quiero señalar que en España las clases dominantes han mantenido una postura clarísima de resistencia a toda forma de imposición moderna y que no es un problema que se pueda considerar para el conjunto de la sociedad.

Espero que estas palabras no se tengan que repetir en el Parlamento, porque sería una muestra de fracaso absoluto de nuestra acción. Esto emplaza al Gobierno a dos cosas: una de ellas es a mejorar las inspecciones tributarias. En la Comisión de Urgencia Legislativa los socialistas nos opusimos a que pasara por Decreto-ley la reforma de la inspección, pues nos parecía muy importante

que la inspección de Hacienda tuviera un apoyo parlamentario desde el punto de vista de la elaboración de una ley correcta para que pudiera disponer de instrumentos eficaces, tanto en cuanto al número de la plantilla de los inspectores como de los medios. En este sentido lamentamos que se haya utilizado la técnica abusiva del Decreto-ley; pero nos parece que está muy relacionado el problema de este proyecto con el problema de la mejora de la inspección. En ese sentido insistimos cuando el Ministro hizo su sesión informativa, ya que nos parece que es importante, porque, si no, podemos seguir jugando a la demagogia de la ocultación de bases y de la elaboración de tipos y de leyes que no se aplican.

El segundo aspecto importante es lo que vamos a tratar al hablar de los créditos extraordinarios y suplementarios, y del Presupuesto. Si comparamos en estos momentos lo que se dice que va a dar esta ley con respecto a lo que van a ser los créditos, nos encontramos con una evidente desproporción. Se habla de cifras entre veinticinco y treinta y cinco mil millones de pesetas. Incluso el Ministro de Hacienda nos decía que si hubiera una reconsideración moral de los ciudadanos se podría llegar a cantidades verdaderamente incuantificables, pero esto se va a ir escalonando en el tiempo, y no va a suponer mucho. Pero vamos a tener que aprobar en un periodo muy breve de tiempo, por lo menos cien mil millones de pesetas de créditos extraordinarios y suplementos de créditos, y esto supone el añadir un nuevo impuesto que sobrepasa los efectos de esta ley, y que es el impuesto más regresivo que se imaginan, que es el de la inflación. Porque esos cien mil millones de pesetas es darle a la máquina para que salgan billetes y para que se paguen actividades en muchos casos ineficaces u objeto de una posible corrupción. Y este impuesto es, desgraciadamente, uno de los que más está funcionando en nuestra sociedad.

Y con ello paso al último punto, que es el del apoyo al empleo y al papel que debe jugar el empleo dentro de la política económica de conjunto.

En este sentido, quizá sea el punto de la ley en donde los socialistas estamos más descontentos. Ciertamente se ha recogido una en-

mienda nuestra que ha modificado el texto que ha ofrecido la Ponencia. Proponíamos otra que era mucho más articulada, mucho más completa, que daba posibilidades de hacer política de empleo, y nos ha sorprendido el que no se haya tomado en consideración. Pero, además, nos parece grave, en el momento actual, en que se muestra una gran preocupación en torno a la crisis, que se haga demagogia contra el paro (en algún Pleno, en esta sala se ha manejado a los parados por parte de algún grupo político contra otros) y lo que creemos es que uno de los aspectos básicos de la consolidación de la democracia y de la salida de la crisis es la formulación de algo que no se ha hecho hasta ahora, que es una política del empleo ambiciosa. En este sentido nosotros somos críticos con esta formulación del proyecto de ley y también con respecto a la consideración que da el Gobierno en su conjunto a la política económica.

Creemos que en estos momentos la política económica del Gobierno responde a sus características, responde a la protección del gran capital.

Se nos propone reducir el déficit exterior y contener los precios con dos soportes básicos: uno, la reforma fiscal y algunas mejoras de gestión —por ejemplo, las Cajas de Ahorro—, y otro la estabilización salarial, tratando de recomponer las expectativas empresariales con una política recesiva en reserva. Esta es una política suficientemente definida y clara, y el único papel que juega el apoyo al empleo es tratar de acallar la mala conciencia.

Sin embargo, pensamos que el problema del empleo debe ser contemplado en primer lugar con perspectiva de pasado y de futuro. Actualmente en España el problema se sitúa en que, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, se habla de que en mayo de este año había aproximadamente 800.000 personas paradas y con una perspectiva de aumento, de las cuales un 70 por ciento no perciben seguro de desempleo, y, además, se concentra de una manera muy clara en algunas regiones del país: Andalucía, Extremadura y Canarias. A ello se une el que un mecanismo que ha funcionado durante el franquismo, la excursión del parado al extranjero, se ha cerrado.

Y otro problema muy importante, y es que el sistema económico español sigue un tipo de lógica de crecimiento que hace que no cree empleos para las nuevas generaciones. Según los cálculos actuales, cerca de trescientas mil personas, doscientas setenta mil son jóvenes que buscan por primera vez empleo, y las mujeres en cierto modo están saliendo del mercado de trabajo.

Pero el problema es más grave, porque en los últimos diez años, y concretamente del 65 al 71, que fue época de crecimiento más o menos regular, nos encontramos con que la capacidad de absorción de mano de obra del sistema no llegó ni al 1 por ciento del crecimiento anual, y que en los últimos cuatro años ha habido un crecimiento nulo.

Tenemos, por tanto, que plantear no la absorción de unos cuantos parados en algunas zonas del país, sino la definición de una política de empleo con una perspectiva a cuatro o cinco años que sea capaz, si queremos el pleno empleo, de llegar a la creación de un millón ochocientos mil puestos de trabajo. Esa sería la cota máxima, pero por lo menos tenemos que buscar la creación del máximo número de empleos y además transformar el carácter de un crecimiento económico que ha sido incentivador en el terreno de invertir capital y sustituir mano de obra, y, en otro muy importante, la intensificación de la explotación, el aumento de las horas extraordinarias y ritmo de trabajo, el pluriempleo.

Pensamos que el próximo Pleno de las Cortes una de las tareas que tiene es la definición de esta política del empleo con transformaciones estructurales y sectoriales, con atención a la política agraria, vivienda, obras públicas, mediana y pequeña empresa, con la redistribución de la concentración industrial y del equilibrio territorial.

Esto es algo que exige un trabajo que tiene que llevar a la formulación de todo un paquete de proyectos de ley que completen o permitan fijarnos un objetivo a medio plazo que lleve a resolver este problema, que puede convertirse en muy grave, de una sociedad que dice que empieza a edificar su futuro volviéndose de espaldas a la juventud.

Por último, querría señalar algunos puntos

sobre la crisis en general. En primer lugar, sobre el papel de los empresarios.

El señor Trias Fargas nos ha dado una visión muy pesimista sobre la situación de los empresarios. Es evidente que hoy se han acabado muchas de las cosas que existían antes en el país. Como él ha dicho, hay una huelga de inversiones desde hace dos años, no sólo por la pérdida de dinero, sino por causas psicológicas, por un problema de expectativas y de confianza. Ahora los empresarios no sólo tienen que quejarse; también tienen que plantearse la capacidad de innovación suficiente para salir de la crisis.

En los últimos días nos hemos encontrado con manifestaciones realmente peligrosas (en pleno período pre-electoral, para constituir las patronales) que hablan de las miles de quiebras y suspensiones de pagos que se pueden producir.

Decía Ortega, hace muchos años, que si comparáramos el número de quiebras y suspensión de pagos en España con otros países europeos y con Estados Unidos, realmente el número era mínimo. Pero lo que desde luego tendrán que aceptar los empresarios es que, en los momentos actuales, el que haya suspensión de pagos en una economía libre y capitalista es algo que forma parte de las reglas del juego; es decir, que lo que pasa es que se han acabado determinados mecanismos, que eran mecanismos inflacionistas, de protección de unos sectores contra otros, y que hoy en día hay que plantearse el futuro de otra manera.

En este sentido, por ejemplo, el tratamiento que se ha dado a los hechos como la suspensión de pagos de la Naviera LETASA, nos parece que no responde a que se haya llegado a la democracia en el país. No se puede apuntar esta suspensión de pagos al pasivo de la democracia. Creemos, más bien, que se debe apuntar a los manejos monopolísticos de determinados sectores importadores de productos agrarios, renta de situación durante muchos años, lo que debe ser examinado por el Parlamento, y que debe ser contemplado a la hora de redefinir una política agraria.

Aparte de la queja, creemos que las patronales y los empresarios, independientemente de cuál sea la visión utópica o futura de la

sociedad, que podamos tener unos partidos u otros, tienen un papel que jugar, pero no sólo el del chantaje y la amenaza, sino que deben dar proposiciones concretas ante el país, el Parlamento y también las centrales sindicales.

En este sentido entro en el último aspecto de esta petición de negociación, que creemos que se debe hacer, y es que tampoco creemos que en el momento actual (y somos conscientes de la dureza de la situación) se pueda plantear la negociación como se está planteando; es decir, simplemente diciendo: o se acepta una moderación salarial impuesta, o, si no, se pueden duplicar las tasas de paro a corto plazo, o, como ha dicho algún Subsecretario del Ministerio de Economía, puede haber una ola de quiebra y de suspensión de pagos.

Hoy en día, los trabajadores y el pueblo son muy conscientes de que tenemos todos que hacer sacrificios. Ahora hay que plantear contrapartidas. No se puede ir a negociar con las Centrales Sindicales sin que haya propuestas concretas del Gobierno y de las patronales acerca de lo que debe ser el papel de la acción sindical en la empresa, acerca de lo que debe ser el futuro del patrimonio sindical.

Imagínense que la reforma política se hubiera tenido que hacer en unas condiciones de que, en vez de haberse mudado el Presidente Suárez a la Moncloa, hubiera tenido que realquilar un piso para poder plantear todo el proceso de reforma. Esto hubiera creado una situación muy distinta.

El paquete debe plantearse en conjunto, abiertamente y con gran transparencia ante el país; si no, no hay negociación; hay imposición.

En conclusión, nosotros, ante las medidas urgentes de reforma fiscal, consideramos que el gran emplazamiento que tiene el Gobierno, y el Parlamento también, es el hacerlo real; es decir, que no se quede en una mera retórica, en una nueva declaración de principios, en incluir determinados rótulos. En este sentido, entendemos que debe proseguirse el trabajo, porque hay que llegar a toda una reconsideración del conjunto del sistema fiscal español, uno de los sistemas más regresivos e injustos de las sociedades europeas.

En segundo lugar, con respecto a la situación económica, entendemos que el Gobierno

vendrá no sólo a plantear ante el Parlamento un plan de estabilización impuesto con ratificación «a posteriori». Creemos que la negociación tiene que hacerse entre las fuerzas democráticas, y debe hacerse fundamentalmente aquí, y también en relación con las fuerzas que representan a la producción, tanto Centrales Sindicales como empresariales.

Por último, nosotros consideramos que, dentro de la dureza y de la gravedad de la situación, este país tiene futuro. Consideramos que la inmensa movilización que ha representado la lucha por las libertades en conjunto y por las libertades nacionales en los últimos dos años responde a una convicción del conjunto de una sociedad que quiere vivir con responsabilidad y participación, y en este sentido nosotros creemos que podemos salir de la crisis. Ahora bien, que debemos de hacerlo por métodos realmente democráticos y no por métodos impuestos. Nada más, muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: El representante del Grupo Mixto, señor Sánchez Ayuso, tiene la palabra.

El señor SANCHEZ AYUSO: Señor Presidente, señores Diputados, en nombre del Partido Socialista Popular, integrado reglamentariamente en el Grupo Parlamentario Mixto, me corresponde expresar nuestra postura global acerca del proyecto de ley de medidas fiscales urgentes, sin perjuicio de las enmiendas específicas que Diputados incluidos en el Grupo Parlamentario hemos presentado ante esta Comisión. Lógicamente quisiera enmarcar esta postura, este juicio crítico, con respecto al proyecto dentro del cuadro más amplio que supone la grave situación económica en que nos encontramos y la forma en que el Gobierno está haciéndole frente, sin perjuicio de que este tema sea tratado más extensamente en un próximo Pleno del Congreso.

Para comenzar, quiero subrayar que todavía no se ha efectuado un debate parlamentario sobre el conjunto de medidas económicas. El Gobierno se ha hecho su composición de lugar, ha realizado su propio diagnóstico y ha preparado su terapéutica, pasando al Congreso una parte de sus medidas, aprobando otras por la vía de Decreto-ley, y prometiendo

remitimos otras más, escalonadas en el tiempo, si bien todavía desconocidas en su mayor parte.

Es evidente, y así lo expuse en la sesión informativa en la que compareció el señor Ministro de Hacienda ante esta Comisión, que una política económica encaminada a conseguir una pluralidad de objetivos, difícilmente compatibles entre sí, dado el marco económico en que nos movemos, necesita ser enjuiciada y debatida en su conjunto. La coherencia de dicha política está siempre en función de alcanzar simultáneamente varios objetivos de política económica con la utilización de distintos instrumentos, o, al menos, establecer unas prioridades, una ordenación de fines clara y ajustada a las necesidades objetivas.

No creemos necesario ponderar la gravedad de la situación económica ni la consiguiente responsabilidad de un Gobierno que se enfrenta con ella a partir de una determinada opción político-económica. El Gobierno parece querer llevar a cabo un plan de estabilización, y a efectuar unas reformas que tiendan a situar la economía española en el marco institucional de una economía neocapitalista occidental. Ahora bien, esas reformas son escasas y discutibles, hasta ahora solamente se citan la reforma fiscal, la progresiva eliminación de proteccionismos ineficaces y una liberalización del sistema financiero.

Esto es claramente insuficiente, incluso desde una perspectiva neocapitalista, pero es que, además, las medidas estabilizadoras, como se ha repetido hasta la saciedad, no pueden ser aceptadas por la mayoría del pueblo, por amplias capas populares, que han podido experimentar cómo el modelo de crecimiento de la época franquista ha supuesto incrementos altos de coste de la vida; problemas centrados en el caos urbano, incluyendo la aterradora falta de equipamientos colectivos, han podido comparar el abandono de una agricultura falta de toda planificación mínimamente racional, la triste realidad de la emigración, etc. Por todo ello, en estos momentos en que se inicia un régimen democrático es preciso que exista una alternativa real, una alternativa en que la democracia se manifieste también en un cambio efectivo del nivel y de la calidad de vida de esas capas populares. Como socialista, es-

timo que éste es el reto al que la sociedad española tiene que hacer frente. Necesitamos una democracia avanzada, que surja así durante este período constituyente, porque las demandas populares de libertad y democracia tienen también una vertiente socioeconómica clara y precisa. Democracia y libertad van inseparablemente unidas a los ojos de amplios sectores de la población, a la extinción de un capitalismo oligárquico que ha generado crecimiento económico en determinados momentos, pero crecimiento inestable e injusto. Es preciso cambiar el modelo económico.

La Unión de Centro, partido en el Gobierno, no va a cambiar el modelo sustancialmente. Introducirá cambios, sí, pero cambios superficiales, y frente a esta realidad la izquierda debe demandar cambios reales, profundos. No es éste el momento, por supuesto, de considerar una transición al Socialismo. Ahora hay que consolidar la democracia; pero esta consolidación exige, repito, cambios reales en todos los campos y específicamente en el socioeconómico. Un plan de estabilización centrado en la reducción de los salarios reales, sin que ni siquiera se negocien reformas sustanciales, no puede ser aceptado. Y cuando digo reformas sustanciales hablo de la Seguridad Social, hablo de la reforma de la agricultura, hablo de la educación, de la política de viviendas, hablo de procesos autonómicos claros y acordes con los deseos de la población, hablo de la reforma de la empresa, de acabar con la especulación del suelo, hablo de medidas eficaces para salvar la angustiada situación de muchos pequeños empresarios, de la necesaria reforma de los canales de comercialización.

Si hubiera que plantearse una reducción de las tasas de crecimiento de los salarios nominales, como consecuencia de la crisis en un marco capitalista, esto sólo tendría sentido, a nuestro juicio, a través de una acción complementaria que redistribuya la riqueza, renta y poderes de decisión, acción que debe ser negociada siempre con las fuerzas políticas, sindicales y sociales. Por ahí debería encaminarse una política económica y social que respondiera a todas las necesidades de una democracia, que sólo se concibe en la España de hoy

unida al calificativo de avanzada, unida a una profunda idea de justicia.

Al exponer nuestra posición sobre el proyecto de ley quería destacar que, considerado en sí mismo, no presenta graves objeciones. Hemos presentado algunas enmiendas sobre puntos concretos; pero lo que, a mi juicio, en estos momentos es importante subrayar es que el proyecto es incompleto. Es incompleto en el sentido de que el país necesita tener un sistema fiscal diferente al que tiene, y que con el proyecto no se cambia sustancialmente el actual sistema fiscal.

Es positiva la tipificación del fraude fiscal como delito, es positivo el levantamiento del secreto bancario frente a la Hacienda pública, es importante crear la figura del impuesto sobre el patrimonio, del que esperamos quede como un impuesto más, sin el calificativo de extraordinario, como ahora ha realizado la Ponencia. Ahora bien, nuestro sistema fiscal requiere, como está en la mentalidad de todos, un cambio sustancial. El Gobierno anunció la preparación de unos proyectos de ley sobre imposición directa e indirecta. Se entiende, o al menos así lo supongo, que la reforma fiscal viene por ahí, y que las medidas actuales son, como se indica, provisionales, de urgencia. Esperamos, pues, conocer esos proyectos de ley, que constituyen la ocasión para poder dotar a este país de un sistema fiscal digno. De todas maneras, convendría pensar y reflexionar sobre un aspecto básico de estas medidas urgentes. No van a aumentar sensiblemente la recaudación, si bien es cierto que a través del trabajo de la Ponencia creo que se podría mejorar este punto. Esto significa que los incrementos de precios y la esperada reducción de las tasas de crecimiento de los salarios monetarios no van a ser compensados de una manera sustancial con unos mayores ingresos públicos procedentes de los gravámenes más altos de patrimonio y de renta, ingresos que pueden dirigirse a aumentar el gasto público necesario para hacer frente de una forma más decidida al problema del paro y para financiar adecuadamente un seguro de desempleo mínimamente aceptable.

Por todo ello es imprescindible que, a la máxima brevedad, se completen las medidas fiscales, efectuando un cambio básico en la

imposición, revisando, por supuesto, el cúmulo de exenciones poco justificadas, y que se lleve adelante la financiación de la Seguridad Social a través del Tesoro Público, medida necesaria bajo todos los ángulos.

Entre el conjunto de temas fiscales que están pendientes está la necesaria reflexión acerca de la Hacienda y las autonomías, cuestión que es preciso ir pensando. Está también la necesidad de plantearse desde ahora mismo el tema de las Haciendas locales. Hay que subrayar este punto, ausente de las medidas fiscales adoptadas y presentadas al Congreso. La participación de las Corporaciones locales en los gastos totales del sector público es muy baja y, desde luego, es bastante inferior a la registrada en la mayor parte de los países europeos. Viene a representar en estos momentos un 9 por ciento aproximadamente del total de gastos públicos no financieros.

Descendiendo concretamente al comentario de algunos puntos específicos del proyecto de ley, lo que quería subrayar es que nuestras observaciones, las del Grupo, van siempre en el sentido de la necesidad de cubrir ausencias y de ampliar el carácter progresivo de las medidas. Por otra parte, pienso que el informe de la Ponencia ha mejorado el proyecto de ley desde diferentes ángulos.

Es claro que en este texto tanto el impuesto sobre el patrimonio como el impuesto extraordinario sobre determinadas rentas de trabajo se refieren a las personas físicas. Habría que ver la conveniencia de la extensión del impuesto sobre el patrimonio a las personas jurídicas, ahora o cuando, como esperamos, se trate el tema fiscal más extensamente al presentarse al Congreso un proyecto concreto de reforma tributaria.

Los tipos impositivos eran bajos, en el caso del impuesto sobre el patrimonio. En este sentido, presentamos una enmienda, no admitida por razones formales, pero entendemos que el texto propuesto por unanimidad por la Ponencia es aceptable.

Por otra parte, tengo el temor de que esta figura impositiva no se aplique de forma correcta, por el desconocimiento de los patrimonios que tiene la Administración y por el amplio margen de discrecionalidad reglamentaria que ofrece la normativa en cuanto, por

ejemplo, a las revisiones de la base imponible.

Quisiera que no suceda lo que ha sido habitual en la legislación tributaria del franquismo: farragosidad y márgenes de discrecionalidad que permiten la no aplicación de las mismas normas. Por eso, es imprescindible que la nueva legislación tributaria sea clara, precisa, y que deje el mínimo margen posible de discrecionalidad.

En relación con el impuesto sobre el lujo, estimo correcta la subida que en el proyecto se hace de los tipos impositivos, y entendemos que podría extenderse a otros productos, como ya se ha hecho por la misma Ponencia.

En el proyecto de ley se regula el apoyo fiscal al empleo. Aquí hemos presentado enmiendas que intentan combinar esta medida fiscal para fomentar el empleo, con el objetivo de reducir los desequilibrios económicos entre regiones. De todas maneras, quería indicar que no soy optimista acerca de la efectividad de estos incentivos fiscales al empleo. Pienso que la búsqueda del pleno empleo debe ser prioritaria para la política económica, y que el Gobierno debe adoptar medidas más eficaces que el apoyo fiscal y que aquellas que adoptó a través del Decreto-ley número 39 de 9 de agosto de 1977, con una evidente escasez de recursos destinados a este importante objetivo.

No dudo de que la moratoria fiscal, ahora regularización voluntaria de la situación fiscal, por acuerdo de la Ponencia, sea necesaria para regularizar situaciones irregulares, pero también quería precisar que no se debe convertir en una total amnistía fiscal.

Quisiera efectuar también unas observaciones acerca del levantamiento del secreto bancario, recordando que tal secreto bancario ha tenido una extensión ilegal bajo el franquismo y viene de la Ley Larraz de 1940, solamente para el caso del impuesto sobre la renta. Se amplió a través de disposiciones reglamentarias y prácticas administrativas que muestran, como en tantos casos, el poder de la oligarquía financiera dentro de la Administración pública.

También queda ausente de este proyecto de ley toda referencia a la Administración tributaria. Pensamos que este tema es trascendental, pues cualquier cambio fiscal, cualquier re-

forma, pasa por ahí, pasa por una reforma de la Administración.

Incluso se han rechazado enmiendas presentadas en relación con este tema que finalmente ha sido tratado bajo la figura de Decreto-ley. No estamos de acuerdo con que esta cuestión, que el mismo Ministro de Economía, señor Fuentes Quintana, considera básica para hablar de cualquier reforma tributaria efectiva, no pase por las Cortes.

Nos resulta preocupante que estas cuestiones de tanta importancia no pasen por las Cámaras y, en este sentido, quería efectuar una reflexión de tipo general:

Mucho nos tememos que, como no reclamemos con auténtica energía el papel que al poder legislativo le corresponde, vamos a encontrarnos en una situación poco airosa, y, lo que es mucho peor, la democracia se resentirá de esta realidad.

Es un tema, por supuesto, que entra de lleno en la constitución que salga de estas Cámaras. A este respecto, he insistido en la sesión informativa con el Ministro de Hacienda, y también lo hago ahora, en que es preciso discutir en las Cortes la situación económica y las medidas que para hacer frente a la crisis propone el Gobierno en su conjunto. Parece que esto va a constituir el objeto del próximo Pleno, que creo tendría que haberse celebrado hace mucho tiempo; es decir, pienso que es fundamental que antes de cualquiera de estas medidas tenga lugar el debate parlamentario sobre el conjunto de la política económica gubernamental.

Solamente así podremos encauzar luego el análisis y la discusión de las medidas concretas y específicas que, por lo que de ellas conocemos, pretende resolver la crisis económica de una forma tradicional, a través de un clásico plan estabilizador adornado con algunas reformas, pero no con las que exige mínimamente la realidad del país y la situación de crisis.

La situación es grave. Frente a la política gubernamental anunciada, cabe otra encaminada a resolver prioritariamente el problema del paro y a actuar muy rápidamente en términos de reformas de estructuras que, por supuesto, incluyen una reforma fiscal en profundidad. En última instancia, de lo que se

trata es de avanzar en la democracia, de profundizar en ésta, haciendo que las débiles y tímidas medidas de democracia política den paso a una verdadera democracia, que se extienda progresivamente al campo económico y social. Este es —repito lo que antes dije— el reto que tiene planteado la sociedad española y al que es necesario responder desde una política audaz y basada en las necesidades populares.

Señores Diputados, es preciso encontrar una política económica nueva que surja de la discusión y negociación entre las distintas fuerzas políticas y que se encamine a resolver prioritariamente el problema del paro mediante una esencial y necesaria reforma de estructuras. Nada más.

El señor PRESIDENTE: Corresponde ahora intervenir al Grupo Parlamentario de Alianza Popular. El señor López Rodó tiene la palabra.

El señor LOPEZ RODO: Señor Presidente, señores Diputados, para no agravar el distanciamiento que existe entre el país real y el Congreso de los Diputados, me parece insoslayable que abordemos esta tarde los graves problemas políticos, económicos y sociales que tienen en vilo al pueblo español, porque todos ellos están íntimamente entrelazados e influyen en la economía. El mundo de la economía no es un compartimento estanco al abrigo de los malos vientos que soplan en derredor. Ya Keynes decía que hasta el vuelo de una golondrina puede influir en las inversiones.

Los reiterados actos de terrorismo, como el salvaje atentado que en el día de hoy ha costado la vida al capitán de la Policía Armada don Florentino Herguedas, el creciente deterioro del orden público y del principio de autoridad, una política claudicante que cede ante todo género de presiones, la extraña presencia de los extrañados, la ausencia de un programa de Gobierno, que a los tres meses de su constitución aún no ha sido presentado al Congreso, la proliferación de las huelgas, incluso de los servicios públicos más fundamentales, las tensiones sociales, la situación sindical, atomizada y confusa, los movimientos asamblearios de signo demagógico, la falta de entendimiento o consensus entre el Go-

bierno, las centrales sindicales y las organizaciones empresariales, son un conjunto de factores que determinan la aguda crisis que estamos padeciendo.

Lamentablemente, el Gobierno no asume sus responsabilidades ni toma las decisiones que exige la gravísima situación en que nos hallamos, y lo que es peor, existen profundas divisiones en el mismo seno del propio Gobierno. Un Ministro muy cualificado del equipo económico ha llegado a decir que no está dispuesto a ser el síndico de la quiebra del Estado. Pero parece que su voz clama en el desierto.

No caigamos los parlamentarios en el mismo defecto de frívola inhibición que ha reinado hasta ahora en las esferas gubernamentales. Examinemos a grandes rasgos el panorama que ofrece la situación económica, marco obligado en el que ha de inscribirse la ley sobre medidas urgentes de carácter fiscal. La situación económica puede resumirse en dos palabras: inflación y depresión. He ahí las dos notas dominantes de la economía del país.

Y cuanto mayor es la inflación tanto mayor es el desempleo como ha demostrado Friedman, premio Nobel de Economía.

Todos sabemos que hemos alcanzado una tasa de inflación del 30 por ciento y que el desempleo se acerca peligrosamente al millón y medio de parados. Esta es la más injusta y antisocial consecuencia de la crisis que padecemos.

La inflación sigue. Y no podía ser de otro modo, como consecuencia, entre otros, de los siguientes factores: un traslado del destino de algunos capitales, un injustificado crecimiento de los gastos públicos consuntivos, 4,5 por ciento, inadmisibles en épocas que exigen austeridad. Finalmente, y no por ello menos importante, una actitud psicológica inflacionista, en ocasiones contagiosa: una verdadera psicosis de inflación. El posible consumidor o ahorrador se pregunta, ¿para qué voy a ahorrar si no me va a valer nada? Y se vive al día, consumiendo a cualquier precio, «porque el dinero no vale nada» —se escucha habitualmente en la calle—, porque mañana valdrá menos, y se acaba perdiendo cualquier sentido del valor del dinero y, naturalmente, con mayor motivo del dinero proyectado al futuro;

es decir, del ahorro. Y si no hay ahorro, una razón más para que no exista inversión, y al reducirse la inversión, disminuyen los puestos de trabajo y aumenta el paro.

Se manifiesta, ante todo, por el retraimiento de las inversiones. Existe una atonía inversora profunda debida, ciertamente, a motivos económicos, pero también, y sobre todo, a la desconfianza política ante un Gobierno que no gobierna, que contempla vacilante e indeciso la crisis económica.

Entre las motivaciones económicas de esta atonía inversora está el empeoramiento de las expectativas de los empresarios y una drástica reducción del excedente empresarial.

En estas condiciones se produce una notable disminución de la inversión —la tasa de formación bruta de capital es negativa (1,3 por ciento) y se produce también un traslado de destinos del capital que deja de aplicarse a la inversión productiva.

Un reflejo de esta incertidumbre política y de esta atonía inversora es la Bolsa, que en una economía de mercado constituye el mejor baremo no sólo de la coyuntura económica, sino de la confianza política.

La espectacular baja de la Bolsa es un plebiscito contra la política del Gobierno, precisamente porque no trata de serlo.

No son los descontentos de tal política los que manifiestan su desagrado haciendo bajar los precios de las acciones. Esta es una idea ingenua que desconoce el funcionamiento de los mercados bursátiles. Todos los españoles pueden acudir a la Bolsa y comprar y vender libremente valores. Entre los que acuden figuran las mentes más conocedoras de la marcha de la economía; si estas mentes no piensan, ante los bajos precios de las acciones, que sería un buen negocio adquirirlas ahora, es probablemente porque no sería un buen negocio. Y no lo sería por la atmósfera política de desconfianza que se cierne sobre la nación. Los que acuden a la Bolsa para comprar o vender no tratan de expresar ninguna opinión política; tratan simplemente de ganar dinero y colocarlo bien. Y el hecho de que tengan la convicción de que las acciones valen poco quiere decir que efectivamente valen poco.

Esta pérdida de valor es dramática para el

pequeño y mediano ahorrador, que no son en-telequias, sino el ciudadano de la calle, esos miles de personas que con el esfuerzo de su trabajo y de su ahorro habían acumulado pequeñas cantidades para su vejez, para las atenciones de sus hijos, para mejorar algo su bienestar.

Pero esto no son palabras, son hechos. Hagamos una simple cuenta y veamos qué le ha ocurrido al pequeño ahorrador desde que asumió Suárez la presidencia del Gobierno el 3 de julio de 1976. Supongamos que un ahorrador, al vez a Suárez presidente del Gobierno, se llena de esperanza, y pensando que todo irá muy bien invierte en Bolsa 100.000 pesetas. ¿Qué obtendría hoy de la venta de sus valores? Pues, sencillamente, 57.544 pesetas. Pero aún hay más: el poder adquisitivo de esas pesetas ha sufrido una merma considerable. Las pesetas de hoy no valen lo mismo que las de hace quince meses. La tasa de inflación de esos quince meses ha sido del 30 por ciento, lo cual supone que las 57.544 pesetas que hoy percibiría el ahorrador, traducidas a pesetas constantes, equivalen a 39.281 pesetas de julio del año pasado. En definitiva, las 100.000 pesetas del modesto ahorrador que depositó su confianza en el Gobierno Suárez ha experimentado una pérdida de casi las dos terceras partes de la cantidad invertida.

En suma, sin ánimo de cargar las tintas, la situación del ahorrador es desoladora y preocupante. Y los efectos tangibles de una ausencia de política económica son altamente antidistributivos.

Y es que no se puede acorrallar y distorsionar al empresario, pues en una economía social de mercado existen unas fuerzas básicas creadoras de riqueza: los trabajadores, los empresarios y los ahorradores.

Al rendir homenaje de reconocimiento a los creadores de riqueza, a los trabajadores que ven erosionarse día a día el poder adquisitivo de sus salarios, no deben silenciarse los otros dos motores: el empresario, que con su actitud de innovaciones, de riesgo y de sacrificio —como en el momento presente— hace posible la existencia de una actividad económica, y los ahorradores, que se cuentan por centenares de millares, y aportan sus recursos

para financiar las inversiones que crean puestos de trabajo.

El empresario realiza esfuerzos sobrehumanos para que sobrevivan sus empresas, viéndose acosado por todas partes: por el aumento de precio de los suministros, por las alzas salariales, por las dificultades de financiación, por las dificultades de cobro de sus productos y por la falta de respeto con que ha sido tratado incluso por algún miembro del Gobierno.

Y, por cierto, debo hacer constar mi disgusto y mi protesta a la presidencia de esta Comisión por no haberme notificado resolución alguna respecto de la moción presentada hace más de un mes, en la que yo solicitaba la comparecencia del señor Ministro de Trabajo para explicar el alcance de sus manifestaciones sobre el régimen de las empresas.

Las restricciones crediticias, las odiseas en el descuento de papel, la petición de moratorias para el pago de la Seguridad Social y a los acreedores, el contemplar la posibilidad de fraccionar el pago a los trabajadores y empleados, mitad el día primero, mitad el quince de cada mes, sus consecuencias, los expedientes de crisis están a la orden del día. No es ciertamente envidiable la posición del empresario en estos momentos.

Tenemos, pues, un escalofriante paro; una subida vertiginosa del índice de precios; una atonía inversora; una caída acelerada de la Bolsa; una crisis de las empresas con cierres, pérdida de puestos de trabajo; un déficit de la balanza de pagos; una psicosis de inflación con pérdida del sentido ahorrador; una incertidumbre política y económica. Esta es la realidad de la situación.

Es de todo punto preciso poner término a esta situación insostenible. Pero para ello hace falta que las medidas económicas, primero existan, y luego que sean adecuadas.

Y ante esta situación, ¿qué piensa el Gobierno? Su posición es muy poco tranquilizadora.

En las reuniones que durante el mes de agosto la Comisión gestora de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales ha celebrado con el equipo económico del

Gobierno, éste estima que existen tan sólo tres alternativas:

Primera alternativa: Entendimiento entre empresarios y trabajadores. En este caso el incremento de salarios no sería superior al 17 por ciento. El Gobierno aplicaría una política monetaria y fiscal flexible, el déficit de la balanza se reduciría a 2.000 millones de dólares, el incremento de paro sería del 10 por ciento, y la inflación sería del 27 por ciento.

Segunda alternativa: Que no exista acuerdo entre empresarios y trabajadores. En este caso el Gobierno seguiría luchando por sanear la balanza de pagos, la inflación sería igual que en el caso anterior —el 27 por ciento—, y se aplicaría una política monetaria restrictiva y una política fiscal rígida, con lo cual el paro se incrementaría en un 100 por ciento.

Tercera alternativa: Que no se dé un acuerdo total, pero sí parcial.

El Gobierno adoptaría entonces una postura de «dejar pasar». La tasa de inflación sería superior al 30 por ciento, el déficit de la balanza de pagos sería de 3.000 millones de dólares, y el paro aumentaría en un 60 por ciento.

Entendemos que sólo la primera alternativa puede tomarse en consideración, ya que las demás conducen al caos. El Gobierno, sin embargo, ante la dificultad de negociación con las centrales sindicales, sigue pensando en la segunda alternativa, que sin duda implica el cierre de miles de empresas y una cifra de paro intolerable.

Pero, sobre todo, el Gobierno no puede contemplar impasible el hundimiento del país ante la falta de entendimiento entre empresarios y trabajadores. Al Gobierno le incumbe la grave responsabilidad de gobernar, y gobernar no es «ir tirando», ni el fenecido principio liberal de «laissez-faire, laissez-passer...». Del último Consejo de Ministros se esperaba un paquete de medidas económicas que comenzase a mostrar la voluntad de dar solución a la crisis. Pero la expectación se ha trocado en decepción. Las medidas siguen sin aparecer, y se habla de que tardarán todavía algunas semanas, eso suponiendo que el equipo económico del Gobierno sobreviva aún unas semanas. Por el momento, lo único que se ha hecho ha sido devaluar la peseta el 13 de julio, sin ir

acompañada la devaluación de las ineludibles medidas complementarias, para evitar que sus efectos queden anulados en breve plazo, y remitir a las Cortes el proyecto de ley denominado de medidas urgentes de carácter fiscal. Vamos a ocuparnos de esta ley.

Su exposición de motivos afirma que «el objetivo más urgente de la política económica lo constituye, sin duda, la desaceleración de los precios como requisito que permita, de una parte, dar efectividad a la devaluación y, de otra, crear un clima suficiente de estabilidad que haga posible la inversión productiva y, por tanto, la paulatina absorción del desempleo». Pues bien, el enjuiciamiento de la ley ha de hacerse en función de su eficacia para combatir la inflación y para combatir el paro. Lo demás es música celestial. Y yo pregunto, ¿es que esta ley va a contener la inflación?, ¿es que esta ley va a aminorar el paro? En su propia exposición de motivos reconoce que para combatir la inflación resulta preciso mejorar la productividad, y que es preciso también «reducir los costes de funcionamiento del sistema» y reducir el consumo. Pero del examen atento del proyecto de ley resulta que no contiene ninguna disposición encaminada a mejorar la productividad, ni a estimular la inversión, sino todo lo contrario. La inversión productiva se ve penalizada, como tendremos ocasión de examinar en el debate sobre el articulado de la ley, al ocuparnos del tratamiento fiscal de las acciones de las sociedades mercantiles. El empresario no recibe el más mínimo aliento en esta ley. Ni las pequeñas y medianas empresas merecen la atención del legislador. En un momento de grave crisis económica, como la que estamos sufriendo, y en que es preciso fundamentalmente ganar la confianza de los inversores, este proyecto de reforma fiscal representa en realidad un importante freno a la inversión.

Tal como se ha configurado la reforma, los cortos plazos que se prevén para regularizar las situaciones y las fuertes sanciones y amenazas que contiene ha despertado una enorme desconfianza y temor entre los inversores. Y cuando digo inversores me estoy refiriendo a todos los inversores y no exclusivamente a los empresarios, ya que la mayor parte de las inversiones no se realizan por empresarios, sino

por el mundo inversor español formado por casi todos los ciudadanos. Asimismo, los inversores extranjeros ven con gran recelo las consecuencias de esta reforma. En cuanto a los empresarios españoles, en el momento en que debería facilitarse toda clase de estímulos a la autofinanciación y a la inversión, se hallan frente a un clima y a unas medidas legales de signo contrario. Una ley de reforma fiscal puede tener, cuando menos, dos enfoques a la hora de enjuiciarla: uno, coyuntural, es decir, al servicio de la situación económica en un momento dado; otro, de carácter estructural con mayor voluntad de permanencia y visión de futuro. El Gobierno, consciente de sus limitaciones, ha renunciado a este aspecto estructural y de proyección de futuro, alegando, de una parte, la innegable urgencia de la situación económica, y de otra, en palabras de la propia exposición de motivos, por el carácter transitorio de las medidas hasta «la reforma fiscal que tiene comprometida el Gobierno», lo cual es grave, ya que supone que reforma tan fundamental como es la reforma fiscal se está haciendo por el sistema de las novelas por entregas, al estilo de la más populachera literatura del siglo XIX.

De este modo, esa voluntad de permanencia y visión de futuro, pese a invocarse, lamentablemente, no se ha tenido.

Pero aún hay más. Lo que en opinión del Gobierno debe constituir la esencia de los remedios tampoco se alcanza. Se nos dice en la exposición de motivos —y no es abusar de ella, pues, como Sus Señorías conocen, en la exposición de motivos se plasma el sentir y el querer del Gobierno— que nos encontramos ante «... una crisis trascendente que debe afrontarse con gran imaginación y perspectiva de futuro». Pues bien, es difícil encontrar en un proyecto de medidas de reforma fiscal menos dosis de imaginación, al recurrir, como piezas esenciales, al fácil expediente recaudatorio del impuesto sobre el patrimonio, a determinadas rentas de trabajo personal y al lujo, recursos impositivos simplistas y alguno de ellos, como el impuesto sobre el patrimonio, hasta ahora sólo implantado en una minoría de los países de la Comunidad Económica Europea, con lo que a su dudosa eficacia, como se ha probado en Colombia, en la India o en

Pakistán —por sólo citar algunos de los catorce países en los que está vigente este impuesto— se añadirá una mayor complicación a la hora de la armonización fiscal europea. En consecuencia, no puede hablarse, seriamente, de unas medidas de reforma fiscal, sino de retoques fiscales con preocupación recaudatoria.

El juicio en torno a esta ley sería positivo o negativo, en la medida en que pueda dar solución, con sus actuaciones, a la presente crisis económica del país. Veamos cuáles son los principales remedios que aporta esta ley:

Un impuesto cuya recaudación se cifra en 20.000 millones de pesetas. Cifra sin duda considerable, pero que para tener auténtico sentido de su volumen hay que recordar que tan sólo supone una semana —siete días— del Presupuesto del Estado —que es sólo una parte del sector público— en su vertiente de gastos.

Un apoyo fiscal al empleo, consistente, de acuerdo con el informe de la Ponencia, en la deducción de las cuotas de los respectivos impuestos del 20 por ciento de la retribución correspondiente a cada nuevo puesto de trabajo.

Una loable moratoria fiscal y una configuración del delito fiscal —sin duda necesaria— pero cuyos efectos nada tienen de inmediato, sino que tienden a la, si acaso, creación de una conciencia fiscal al cabo de un largo período de tiempo.

La desproporción, señores Diputados, entre los problemas que he enumerado y descrito y los remedios que se intentan es tan manifiesta que bien puede calificarse de inoperante.

Se precisa una gran dosis de serenidad y de responsabilidad y por ello —respetando el carácter social que el proyecto puede tener— me parece que las medidas urgentes de reforma fiscal poco o nada tienen que ver con la situación económica actual y que el Gobierno, amparado en la gravedad de la crisis económica, trata de hacer pasar un proyecto de ley que es inadecuado, por su insuficiencia, y que tiene una marcada y excesiva preocupación recaudatoria, en vez de primar el afán redistributivo y la necesaria política estabilizadora.

Así están las cosas y España está ahí mirando ansiosa a sus legítimos representantes a la espera de soluciones eficaces a los graves problemas políticos y económicos que tiene planteados. No podemos defraudar al país. Y mucho me temo que esta ley le defraude. Es preciso que, cuanto antes, se abra un amplio debate parlamentario sobre la crisis económica ante el Pleno del Congreso, del que se obtenga un consensus entre todas las fuerzas políticas que permita sacar el carro del atolladero. El Gobierno, por sí solo, no puede salvar la dramática situación en que nos encontramos, y hace falta alcanzar una amplia concordia nacional que demuestre al pueblo español que sus Diputados están a la altura de las circunstancias.

El señor PRESIDENTE: Señores Diputados, vamos a interrumpir la sesión durante diez minutos, porque el ardor expositivo debe haber sometido a los taquígrafos a un verdadero martirio. Interrumpimos durante diez minutos y continuamos inmediatamente.

El señor TAMAMES GOMEZ: Señor Presidente, para una cuestión de orden. Sugiero que los diez minutos sean efectivos, que no sean los normales de esta Casa, de casi media hora.

El señor PRESIDENTE: Aquí será distinto. Se suspende la sesión.

Se reanuda la sesión.

El señor PRESIDENTE: Corresponde intervenir a continuación al Grupo Parlamentario Socialistas de Catalunya. Tiene la palabra el señor Lluch.

El señor LLUCH MARTIN: Señor Presidente, señores Diputados, en mi anterior intervención el demócrata-cristiano, señor Alvarez de Miranda, Presidente del Congreso, me interrumpió cuando iba a hacer una cita del Evangelio aplicada al actual Ministro de Hacienda, en el sentido de mi temor de que no incurriera en la suerte que aflige con frecuencia a los tibios. Este consejo, que se po-

dría aplicar a otros Ministros de Hacienda anteriores en España, y se ha aplicado a Canga Argüelles, viene a cuento en el sentido de que en estos momentos estamos dentro de una grave crisis, y que no valen tibiezas, sino definiciones concretas y claras. Es un momento en el cual todos los planes de la vida social, de la vida económica, se mezclan, se confunden y dan lugar a una crisis; es decir, aquellos momentos en los que lo viejo muere y, en cambio, aún no ha nacido el futuro. Sin embargo, hay que definir claramente la profundidad de esta crisis.

Estamos en un momento en el cual tenemos un importante déficit de la balanza de pagos, una inflación considerable y un paro que es, realmente, dramático; pero habría que hacer una severa llamada de atención a las exageraciones sobre la actual crisis. Aquí se ha hablado de peligros de confiscación, de nacionalización, de incautación y de colectivización de empresas, y nadie puede decir que ningún partido de izquierdas que esté representado en este Parlamento, ni prácticamente ningún partido de izquierdas que esté fuera de este Parlamento, estén hablando de este tipo de fórmulas para salir de la crisis, y es alarmante utilizar estos términos, porque ello puede ir configurando una psicosis catastrofista que sería un mal elemento.

También es preocupante escuchar cómo el Secretario general de un Partido dice que la crisis económica mundial actual es mucho más grave que la de 1929. Si miramos por parados, si miramos por producción, sabremos que la crisis económica mundial actual es menos grave, menos catastrófica que la que tuvo lugar en los años 30. Por tanto, nos parece necesario que no se insista tanto en interpretaciones catastróficas que podrían crear unas expectativas sobre una situación económica y social mucho peor que la actual, y cuyas expectativas desfavorables podrían actuar en el sentido de transformar lo que es una crisis en una catástrofe.

¿Cómo ha nacido la crisis y cuándo ha nacido? Esto es importante: por consecuencias políticas que a nadie escapan. En el caso de España, la crisis llegó a finales de 1973, en vida del general Franco, y esa crisis no fue enfocada; esto hay que subrayarlo. Tampoco

lo fue con el Gobierno del Presidente Arias Navarro, y tampoco el primer Gobierno del Presidente Suárez hizo prácticamente nada para resolver la crisis económica. Solamente es a partir del 15 de junio cuando se empiezan a tomar algunas medidas con respecto a la situación. ¿Cómo hay que valorar o cómo valoramos nosotros lo que se ha hecho desde el 15 de junio?

Se hizo una devaluación que ya era de hecho. Solamente los que no eran de la oposición negaban, por ejemplo, que el endeudamiento exterior era de doce mil millones de dólares, pero a partir del 15 de junio, incluso Unión de Centro Democrático lo reconoció y, por lo tanto, la devaluación fue simplemente dar por hecho algo que ya sabíamos.

Se anunció en aquellos momentos un control de precios que, como también es bien sabido, en este caso no ha tenido ningún tipo de consecuencias. En cambio sí las tuvo el aumento de algunos precios de control público.

La política económica en estas últimas semanas ha recaído básicamente sobre restricciones monetarias, y aquí es necesario insistir que si bien la contracción monetaria que ha marcado el Gobierno ha sido considerable, lo ha sido mucho más por la acción de la Banca privada, y una ligera consulta a las estadísticas monetarias confirma lo que acabo de decir. Esto es algo que hay que subrayar, sobre todo porque aquí se ha citado a Milton Friedman, del cual se ha recordado que es premio Nobel de Economía, pero no se ha recordado que es el asesor económico del general Pinochet. Y no es que yo condene solamente este hecho, sino que lo condeno por la circunstancia de que las teorías monetarias de Friedman aplicadas han dado lugar a un paro casi sin precedentes casi en la historia, a hambre, a unos precios que, prácticamente, no han parado, etc. Si ésta es la alternativa de la actual situación, me parece que es una alternativa bien deplorable y contra la cual lucharemos como luchamos contra la anterior dictadura.

La situación en estos momentos viene para los socialistas marcada por alguna característica fundamental, como es la del paro. En estos momentos no voy a repetir cifras que ya

se han dicho. El paro significa, según los datos oficiales, el 5,4 por ciento de la población activa, pero si se añade a esta población parada lo que la jerga estadística llama trabajadores desanimados, veremos que la cifra de paro llega ya a sobrepasar el 9 por ciento, y, por lo tanto, tenemos una cifra global de 1.330.000 parados. Esta es una cifra importante, y la lucha contra el paro va a ser el norte de la política económica que estamos defendiendo, y vamos a defender en el futuro los socialistas.

Pese a que solamente se han aplicado medidas monetarias que en los últimos tres o cuatro años hay que reconocer que han sido medidas contradictorias y que han funcionado a golpes, sin mucha continuidad, hay que ver cómo la repercusión sobre las empresas ha sido muy negativa, puesto que ha reducido el acceso de estas empresas al financiamiento bancario, situando, en desventaja, sobre todo, a la empresa pequeña y mediana, que no accede a fuentes de financiación alternativa, sean exteriores o sean privilegiadas.

El aspecto financiero es, pues, un primer obstáculo que encuentra la empresa, impues-to con tal de atemperar el ritmo de la actividad económica.

Hay que tener en cuenta que el mercado exterior solamente es accesible para unas cuantas empresas, y no resulta estimulado por los bajos niveles de crecimiento de la renta en otros países capitalistas occidentales, aunque, como es notorio, empiezan ya a salir de la crisis.

Por otro lado, las ventajas relativas que proporciona la devaluación o las devaluaciones que se han realizado se reducen por los efectos de una inflación diferencial más elevada que tiene la economía española y, en esto hay que insistir, porque si importante es la inflación del 30 por ciento, muy importante es también que estemos doblando la media de la inflación del mundo económico, con el cual nos relacionamos.

Por otra parte, el mercado interior tiene un comportamiento contractivo, puesto que los aumentos salariales han sido elevados en unos pocos sectores, pero la media del conjunto salarial no ha aumentado de una manera espectacular, lo cual, combinado con la presencia

de una amplia población parada, tal como hemos visto, significa que la demanda interior no ha crecido como para originar una demanda satisfactoria para la actividad productiva.

Habría aún que analizar que la continuidad en la inflación ha originado el fenómeno del consumo avanzado, propiciado por la expectativa de aumentos de precios, pero, naturalmente, este consumo avanzado se ha acabado ya y queda de él sólo una propensión al consumo más elevado de las rentas actuales.

En último lugar, podríamos decir que la demanda interior, en la parte que corresponde a las inversiones, permanece frenada, dada la falta de expectativas empresariales que existen.

Con respecto al gasto público, tenemos que decir que no solamente se ha de tratar si el gasto público se puede elevar o no, sino que hay que reestructurarlo, hay que ir a un saneamiento del gasto público y a una utilización más racional de la asignación de los recursos públicos más correctos que los realizados hasta ahora. Muestra de esta falta de racionalidad es que la proporción de sueldos de funcionarios es en este momento ya casi la mitad del Presupuesto, y es una proporción que es creciente. La reducción de mercados supone, pues, que una reducción de la producción, lo cual tiene como consecuencia el incremento de unos costos unitarios, costos unitarios en los cuales una Seguridad Social antidemocrática y malgastadora significa prácticamente el 25 por ciento de las retribuciones salariales cobradas en mano. La reducción de la actividad incide sobre los precios y la existencia de una estructura de seguros sociales costosa y no financiada impositivamente multiplica la incidencia de los costos salariales en los precios. Este aumento de costos hace que muchas empresas tengan que cesar en sus actividades, con lo cual aumenta el paro y también se evita paralelamente la creación de nuevas empresas. Pero hay que hacer una pregunta que es básica: ¿Se distribuyen igualmente los efectos de la crisis? Incluso dentro del sistema productivo, los efectos de la crisis se distribuyen en forma profundamente distinta, y depende de la situación en la que se encuentra cada empresa. En aquellas empresas que sirven mercados

monopolísticos, u oligopolísticos —un caso sería el del automóvil—, pueden revertir con facilidad en los precios los aumentos de costos y la baja de producción. Las empresas que sirven al exterior se han beneficiado de la devaluación, pero el ritmo de la inflación diferencial se ha comido muy rápidamente las ventajas adquiridas por la devaluación. En cambio tenemos que las empresas que trabajan en mercados competitivos, como el textil o mercados en los cuales son mayoría las empresas medianas y pequeñas, o bien aquellas empresas que trabajan en condiciones monofísicas, como, por ejemplo, un vendedor de piezas a la Seat, tienen que compensar con sus márgenes de beneficio los aumentos de costos y las bajas de producción, de manera que las pérdidas aparecen, y, por tanto, son este tipo de empresas las más perjudicadas por la crisis. Por eso hay que decir que existen sectores favorecidos y sectores desfavorecidos por la inflación, y lo mismo diría con respecto a las restricciones monetarias, alejándome, pues, de las teorías de Milton Friedman.

Naturalmente, la agricultura habría que ponerla, por las razones dichas, entre estos sectores más duramente afectados. Esta inflación, con esta política tan reducida a una política monetaria, tiene una serie de consecuencias que, brevemente, me gustaría analizar.

La primera es el estímulo del acaparamiento y de la especulación en frente de la inversión productiva. En definitiva, y en términos clásicos, la disminución del trabajo productivo simplemente, o bien la aparición de trabajo improductivo o simplemente de la acumulación.

En segundo lugar, fuertes desajustes, según empresas y sectores, que llevan a que las tasas de beneficios sean muy distintas, y a que estemos en una etapa de la cual salgamos con una concentración capitalista mucho más acentuada de la que había antes de la crisis. En último término, un empeoramiento de la situación de las clases trabajadoras, especialmente de los obreros parados, de los jubilados y de los trabajadores en sectores menos avanzados.

Esto, naturalmente, nos tiene que poner ante un problema, y es el de cómo salimos

de la crisis económica. O, dicho en otras palabras, cuáles son las fórmulas por las cuales salimos de esta crisis económica.

Al Ministro de Hacienda, tanto mi compañero Enrique Barón como yo, ya le señalamos hace algunas semanas la necesidad de abrir un proceso de negociaciones. Los socialistas estamos convencidos de que un agravamiento, o simplemente el mantenimiento de la crisis económica, no facilitan el arraigo de la democracia. Y sabemos también que esta democracia es una democracia que hemos logrado y hemos conquistado los Partidos, los hombres ligados a las clases populares. Engels ya recordaba aquella frase de un político burgués de que la legalidad nos mata. Y, naturalmente, nosotros hemos ganado la democracia y pensamos que tenemos que utilizar a fondo los instrumentos de la democracia. Esto es algo que los socialistas tenemos presente, y no es que lo tengamos presente, sino que lo practicamos. Todo el mundo sabe que donde los socialistas son fuertes y donde los socialistas ocupan el poder la libertad y la democracia no corren ningún peligro; y no corren ningún peligro porque hemos sido capaces de introducir reformas económicas y sociales que han asentado la democracia y han hecho posible además —y están haciéndolo posible— que los efectos de la crisis sean mucho menores, sean mucho menos dolorosos.

Por esto, nosotros vamos a ser absolutamente responsables ante la actual situación, y, por tanto, decimos una y otra vez que creemos que el Parlamento tiene que ser un elemento esencial de la política española, y que hay que arbitrar todos los procedimientos necesarios.

Por ello pensamos que para salir de la crisis económica y social es necesario establecer un entendimiento programático, un acuerdo programático que llegue a todo el conjunto de fuerzas en las medidas y en los caminos para salir de la crisis. Nosotros creemos que entre el Gobierno formado por la U. C. D. y los Partidos de la oposición hay que llegar a un acuerdo sobre estos puntos. Por ello nos alegramos, aunque insistimos en que se ha hecho demasiado tarde y veremos cuándo se hace realmente, de que se traiga la política económica a este Parlamento.

Insistimos en ello porque creemos que ésta es la salida: hacer un acuerdo programático que vaya acompañado del proceso de negociaciones que ya hace algunas semanas anunciamos. Un proceso de negociaciones que tiene que ser continuo; es decir, que este acuerdo, que tiene que tener un principio y un final, un período de tiempo en el cual tiene que ser válido, tiene que ir acompañado de un proceso de negociaciones continuo, en el que se revisen las actitudes, las posiciones y la forma en que se aplica este acuerdo. Por esto, estamos preocupados, porque en el momento en el cual se está haciendo el programa económico del Gobierno, se está negociando ya fuera del Gobierno, sin que las centrales sindicales intervengan y sin que los partidos representados en este Parlamento, con excepción de uno, intervengan. Nosotros pensamos que hay que establecer otro tipo de actitud para salir de la crisis. No creemos que la actitud mostrada en las conversaciones con las centrales sindicales sea la correcta. No creemos que haya que hablar de unas contrapartidas tan débiles como las que se han hecho. Si no se habla del patrimonio sindical, y esto se va siempre dejando en el tiempo, si no se habla de una ley de garantías sindicales, es que no se quiere realmente tener a fondo unas conversaciones serias con las centrales sindicales.

Pero esto no solamente ha pasado con las centrales sindicales, sino que está pasando aquí. Cuando Enrique Barón y yo hablábamos del proceso de negociaciones, el Ministro de Hacienda dijo —lo recuerdo textualmente— que tomaba buena nota. Pero al cabo de pocos días empezaron a surgir rumores sobre que el Gobierno estaba preparando un proyecto. Proyecto que fue el Decreto sobre las Cajas de Ahorro, el cual tenía que haber pasado por este Parlamento. No fue así, pero aviso que los socialistas de Cataluña estamos preparando una proposición de ley con respecto a este proyecto. Esto fue un gesto grave, porque a las pocas semanas de la aceptación de nuestro ofrecimiento pasó por el Ministro de Hacienda, lo que muestra más aún cuál es la actitud del Gobierno sobre este punto.

¿Qué opinamos de este Decreto sobre las Cajas de Ahorro, que es una de las pocas medidas que se han tomado hasta ahora? Pen-

samos, en primer lugar, que la democratización de las Cajas de Ahorro es puramente aparente, porque deja al margen las instituciones autonómicas, que no solamente competen a Cataluña, sino prácticamente a la mayor parte de las regiones del Estado español. En el Decreto sobre Cajas de Ahorro no se contempla en absoluto nada que haga referencia a las autonomías. Así mismo, tampoco se ha soslayado la importancia a las federaciones, lo que acaba de confirmar nuestra propuesta.

En segundo lugar, lo que se llama la democratización de los órganos de Gobierno a que hace referencia el proyecto es totalmente rechazable, y nosotros lo entendemos como una —para no utilizar palabras altisonantes diríamos— moderadísima interpretación de la democracia por parte del Gobierno, lo que no constituye, por otra parte, ninguna novedad.

Introducir en el mundo de las Cajas de Ahorro el sistema por el cual han actuado durante la dictadura los clubs de fútbol, es decir, el sorteo en la elección de compromisarios, ya se sabe qué resultados da; que los futuros elegidos serán normalmente gentes pertenecientes a la alta burguesía y al capitalismo.

En el proyecto hay algunas cuestiones preocupantes, como los artículos 17 y 18, que dan el real poder a todo el grupo de dirigentes de las Cajas, como si fuera a fortalecerse un grupo de altos funcionarios; lo que en Italia se llama burguesía de Estado, con respecto a una auténtica democratización.

Por otro lado, en cuanto a la regionalización de las inversiones de las Cajas de Ahorro, si uno examina su contenido, se encuentra con que la voluntad es prácticamente hueca en lo que se refiere a sus repercusiones prácticas. El fuerte drenaje de fondos que existe en valores públicos y privados de renta fija podría resultar limitado por el hecho de la calidad de éstos. Al menos debería hacerse en valores que representasen inversiones en la región en que actúen. Pero la efectividad de esta medida desaparece al considerarse como inversiones regionales las que realizan el I. N. I. o la Compañía Telefónica, etc., jamás dirigidas con sentido de regionalización.

Por otra parte, las Cajas arrastran un pesado lastre de inversiones de tipo revalorizador que han debido realizar obligatoriamente

en años anteriores, integradas por títulos de intereses bajos que no pueden ser liquidadas si no es con fuertes pérdidas, de manera que no permitan recomponer las inversiones en aquellas actividades de interés territorial específico.

En otro sentido —no quiero extenderme en este punto—, al no suprimir los circuitos privilegiados de financiación de las grandes empresas públicas y privadas, no se ha atajado uno de los problemas fundamentales, no solamente de las Cajas de Ahorro, sino del capitalismo español. Pensamos que estas subvenciones deberían suprimirse o, en todo caso, correr a cargo de los Presupuestos generales del Estado y ser aprobados por las Cortes. Como se sabe, las Cajas de Ahorro se han constituido durante los últimos años mediante el coeficiente de inversión obligatoria en el soporte financiero de los grandes grupos de presión del capitalismo español: Eléctricas, Autopistas, Químicas, etc.

Y éste es un breve balance de cuál ha sido la política que ha llevado a cabo el actual Gobierno, así como la salida que nosotros proponemos para la actual crisis. Sin embargo, éste es un tema al que esperamos dedicar nuestra atención más adelante y definir más concretamente cuál es el tipo de política económica que nosotros defenderemos para el establecimiento de este acuerdo o entendimiento programático.

Pero querría, antes de acabar, analizar, definir algunas de las grandes líneas en las que los socialistas nos moveremos.

En primer lugar, pensamos que hay que hacer una dura acción contra el paro, y pensamos que para hacerla habrá que emprender un desarrollo de los servicios de equipamiento social; hacer una política claramente favorecedora de los sectores intensivos en trabajo; incrementar las rentas populares, fundamentalmente, jubilaciones y seguros de paro; tratar a fondo el problema de la financiación de la Seguridad Social; desarrollar una política regional eficiente, sobre todo en Andalucía, Extremadura y Canarias, y otro tipo de medidas como es la reducción de la jornada de trabajo y de la edad de retiro.

Con respecto a la información habrá que establecer un nuevo marco, yo diría un nuevo

aire, al tipo de política emprendido, y habrá que establecer, tal como decía al hablar de las relaciones del Gobierno con las centrales sindicales, una contrapartida mucho más clara. A la del destino del patrimonio sindical y una ley de garantías sindicales, añadiría otras, como el control tan deseado de la Seguridad Social, los controles por parte de los trabajadores de las inversiones de equipamiento colectivo y de los fondos salariales de las empresas.

En estos momentos, habría que fijar una medida tan importante como es la posibilidad de que los trabajadores puedan conocer cuál es la marcha de las empresas, debido a que ahora nos encontramos continuamente con que los trabajadores se enteran de hoy para mañana que sus empresas o bien presentan suspensión de pagos o bien reducen su jornada de trabajo.

Por otro lado, habría que actuar en contra de todos los múltiples sectores especulativos que hay en la economía española y que antes ya he explicado, que en estos momentos son sectores que están creciendo y dentro de esos sectores especulativos habría que hacer una mención específica de todos los sectores de comercialización de la agricultura; una agricultura que está pasando una situación dramática que hay que resolver rápidamente y que este Parlamento deberá ocuparse de ello, para que pueda encontrar una de sus mejoras en el fortalecimiento del cooperativismo, pero no solamente del cooperativismo productivo sino del cooperativismo comercial.

También habrá que luchar contra la inflación; esto lo defenderemos estableciendo, de acuerdo con las centrales sindicales, un número de artículos básicos sobre los cuales habrá que hacer una acción realmente fuerte, realmente profunda.

Querría solamente acabar con una breve referencia al nuevo papel que tiene que jugar evidentemente la empresa pública en España. Esta empresa pública tiene que cambiar fundamentalmente. Es doloroso tener que decir que esta empresa pública no ha cambiado desde el 15 de junio y que en los cargos de dirección de muchas de estas grandes empresas públicas aún no se han reflejado los resultados del 15 de junio. Continúan estando en las

manos de siempre, y por lo tanto continúan siendo esclavas o dependiendo de muchos hombres formados y forjados con el franquismo.

Solamente cuando haya este nuevo marco político, cuando el Gobierno lleve al Parlamento su intento de formación de una política económica, cuando esté decidido a entrar en este proceso de negociaciones es cuando intentaremos de una manera responsable precisar este conjunto de medidas que ahora solamente he querido enunciar.

Si no sabemos salir de la crisis económica; si se intenta que la crisis económica continúe recayendo como otra vez, como en el año 1959, por ejemplo, sobre las espaldas de los trabajadores, de los pequeños y medianos empresarios, sobre los jubilados, evidentemente no habremos hecho una tarea básica que tenemos ante nosotros, que es la tarea del fortalecimiento de la democracia. Esta es nuestra gran responsabilidad, y los socialistas, insistimos, defenderemos la libertad y la democracia como siempre la hemos defendido.

Muchas gracias.

El señor RODRIGUEZ ALCAIDE: Señor Presidente, para una cuestión de orden. Yo estoy adscrito a la Comisión de Economía y Hacienda y agradezco a todos los portavoces de los grupos parlamentarios que aquí han hablado la ilustración, pero, según el telegrama que he recibido, se me ha convocado a una Comisión que va a dictaminar sobre un proyecto de ley que se llama «Medidas urgentes de reforma fiscal». Lo único que le pediría a la Presidencia es que me diga si estoy equivocado o no, para que sugiera a los que van a continuar en el uso de la palabra que en la medida de lo posible —yo comprendo que soy muy nuevo en esto— se puedan ceñir al máximo al proyecto de ley que vamos a intentar dictaminar. Si estoy equivocado, pido perdón a la Sala.

El señor PRESIDENTE: Los representantes de los grupos tienen media hora para intervenir. Ciertamente, como usted sabe, y sabe muy bien, el artículo 8.º de las normas provisionales por las que nos regimos dice que se harán las exposiciones de los criterios sustentados acerca del proyecto. Entiendo yo que

hay que tener en esto una interpretación amplia, porque los criterios se pueden sustentar en consideraciones sobre política económica, como así ha ocurrido en casi todos los casos, y en alguno me he quedado sin oír los criterios ostentados acerca del proyecto, pero eso es una cuestión del orador. Es su problema y no de esta Presidencia. Estimo que, en el fondo, en cuanto que se está hablando de temas económicos que de una manera u otra puedan estar relacionados con este proyecto hasta que lleguen al final de su intervención yo no sé si hay conexión o no. En algún caso me parece que no la hay, pero creo que no es motivo suficiente para privar a nadie del uso de la palabra.

Por tanto, la exposición de cuestiones económicas generales que se puedan relacionar con el proyecto, entiendo que está admitida y allá cada orador con lo que hace de su media hora. Por supuesto, si se tratara de representantes de Grupos Parlamentarios que vinieran a hablar de temas totalmente ajenos, no lo permitiría o intentaría no permitirlo, pero ningún tema económico es ajeno a este proyecto de ley. Así lo entiendo.

El señor RODRIGUEZ ALCAIDE: Muchas gracias por su aclaración, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Tamames, del Grupo Parlamentario Comunista.

El señor TAMAMES GOMEZ: Ante todo muchas gracias por la interpretación amplia que la Presidencia ha dado a la pregunta del señor Rodríguez Alcaide, que yo me pregunto por qué no la dijo antes; es decir, que esa cuestión de orden no la planteó cuando ya se vio que, efectivamente, las interpretaciones que aquí estamos dando de lo que son los distintos criterios son amplias y no puede suceder por menos. El proyecto de ley que hoy discutimos, en cuanto a criterios generales, se ha discutido ya el 9 de agosto, como todo el mundo sabe, y se va a volver a discutir en el Pleno. Quizá sea fruto de nuestra inexperiencia parlamentaria que estemos discutiendo cuestiones generales sobre el mismo proyecto de ley tres veces. Pero esto contribuye a que vayamos aprendiendo y hagamos las cosas mejor.

Por eso, en representación del Grupo Parlamentario Comunista no voy a insistir en puntos que ya sostuvimos en la sesión del 9 de agosto. Nos ratificamos en todo lo que en aquel día dijimos y, concretamente, en la circunstancia de que el plan económico del Gobierno es un proyecto de estabilización con algunas piezas de reforma fiscal, pero nada más. Yo diría que tampoco hay que minimizar, sin embargo, lo que esa reforma fiscal representa. Estimo que si se ha criticado aquí la falta de imaginación de los proyectos fiscales del Gobierno, otros proyectos u otras circunstancias se podrían haber criticado mucho más en nuestro reciente pasado histórico, cuando en situaciones semejantes a ésta había que conseguir mayor recaudación y simplemente se recurría a aumentar los impuestos sobre el cine, el tabaco, la gasolina y otros productos. Hoy, con todas las limitaciones que pueda tener el proyecto, lo cierto es que hay la apertura de una nueva fase en nuestra historia fiscal, y no necesariamente sin imaginación, puesto que hay nuevas figuras impositivas importantes. Nosotros lo decimos y claramente apoyamos los aspectos fiscales de estas medidas económicas urgentes.

Y lo apoyamos sencillamente porque también estaba en nuestro programa económico, sin que esto signifique ninguna referencia a pretendidos plagios, como tantas veces se está aludiendo en estos días.

Creo que los programas fiscales de los Partidos que tienen más o menos una posición progresista se parecían mucho en la pasada campaña electoral.

Apoyamos los aspectos fiscales, como digo, y nos preocupan algunos detalles, a los que paso a referirme. En ese sentido, como miembro de la Ponencia y como representante del Grupo Parlamentario Comunista, estimo que tal como se encuentra hoy el proyecto al presentárselo a la Comisión, ha mejorado mucho, sobre todo porque ha aumentado su progresividad. Ha aumentado su progresividad, primero en los tipos impositivos de las escalas del impuesto sobre el patrimonio y del recargo excepcional sobre los rendimientos del trabajo personal. Ha habido también mejoras importantes —y han insistido algunos oradores anteriormente— en cuanto a la publicidad de las listas; y ha habido también la creación del

impuesto extraordinario sobre beneficios extraordinarios (valga la redundancia).

Creo que todos esos elementos significan un aumento de la progresividad y a mí me ha extrañado (lo digo con sinceridad, porque creo que debemos hacernos las críticas de nuestras actitudes) que dos oradores que me precedieron en el uso de la palabra, miembros de esta Ponencia y Comisión, han tenido frente al proyecto un tono mucho más crítico en esta Comisión que en el seno de la Ponencia.

Me parece que en el seno de la Ponencia estábamos prácticamente de acuerdo en todo y aquí se han visto posiciones agudamente críticas sobre el proyecto de ley en sí, no sobre su entorno, que es cosa diferente.

A mí me parece también que acerca del fomento fiscal del empleo, sobre el cual se pueden tener todas las dudas y pesimismos que no comparto enteramente (el profesor Calvo y otros han hablado extensamente de ello) y se puede pensar que no va a tener ningún resultado, lo cierto es que para que pueda haber resultados tiene que haber medidas de fomento fiscal del empleo y creo que, desde el punto de vista fiscal, es la primera vez que se introduce también en la legislación española, por lo menos en los últimos tiempos.

En definitiva, sobre el proyecto, podremos pronunciarnos a lo largo de la discusión sobre algunos detalles. Hay temas que todavía nos preocupan, como por ejemplo la infravaloración que de hecho se va a producir en las bases del impuesto sobre el patrimonio en relación con los patrimonios de naturaleza rústica y pensamos con los compañeros del P. S. O. E., que ya estuvimos trabajando en este sentido en la Ponencia, que podrá introducirse algún método que mejore el actualmente existente en el proyecto.

El tema de la presunción, en cuanto a la fecha a fijar para el conocimiento de los patrimonios, pensamos suscitarlo en el debate. Para nosotros el 11 de julio no significa retroactividad, puesto que ya en su declaración programática del 11 de julio el Gobierno habló muy claramente de un impuesto sobre el patrimonio. Y también algunas otras cuestiones pendientes (en donde la Ponencia no llegó a un acuerdo), como, por ejemplo, si se deben valorar las acciones al cien por cien o al

80 por ciento, como estaba en el proyecto primitivo.

No voy a referirme a otros muchos aspectos de detalle que van a quedar para la discusión y el propio representante del Gobierno ya ha hablado de estas cuestiones, creo que con bastante fidelidad, a lo que en la Ponencia se trató.

Pero, señores Diputados, la preocupación que hoy nos viene a la mente es sencillamente la del entorno de esta ley, la limitación de las medidas fiscales; esos 30.000 millones de pesetas que se piensan recaudar, que van a ser una gota de agua a lo sumo en un Presupuesto que puede tener para los gastos estrictamente del Estado un billón trescientos mil millones de pesetas, para la Seguridad Social un billón doscientos mil millones y para los Organismos Autónomos en torno a los quinientos mil millones. Es decir, nos vamos a situar en una cota de tres billones de pesetas en los Presupuestos generales. No quiero extraer el porcentaje de lo que van a representar estos 30.000 millones que se van a recaudar. Los resultados de esta reforma se harán esperar, lo cual tampoco significa que nosotros seamos reacios por eso a introducirla; al contrario, hemos sido muy favorables, porque incluso las medidas, aunque produzcan efectos a largo plazo, hay que introducirlas en un momento determinado.

En este sentido pensamos, además, que estas medidas irán calando en la sociedad española, irán teniendo efectos, y los ricos en España tendrán que acostumbrarse a tributar más mientras sean más ricos. Yo ahí disiento de la visión de Enrique Barón cuando se refería a Calvo Sotelo, y a lo que pasó con CAMPSA, y con todos los impuestos que diseñó Calvo Sotelo, de los que se lamentaba después en su libro «Mis servicios al Estado». Lo cierto es que Calvo Sotelo empleaba una forma de expresión en este libro que no correspondía a los hechos, porque Calvo Sotelo hizo la CAMPSA y Calvo Sotelo se la entregó a los Bancos y sucedió lo que sucedió.

Naturalmente que se modifique un impuesto depende de quien lo administre después; si lo administran los propios futuros gravados por este impuesto, lo van a administrar en su favor. También en el anterior régimen se puede

hablar de una serie de legislaciones con intentos más o menos propagandistas, como la Ley de Fincas de 1953, que era manifiestamente mejorable, que se hizo para llevarla a la F. A. O. y decir que España tenía en marcha una especie de reforma fiscal o agraria para las grandes fincas.

A nosotros nos preocupa la situación del país, el entorno general, y en ese entorno creo que son muy oportunas las palabras que el Ministro de Hacienda pronunciaba o, mejor dicho, se recogían de su conversación con una entrevistadora del diario ABC, Pilar Urbano, y que leo de ella un párrafo bastante significativo:

«El sentimiento de corresponsabilidad es urgente y debe instalarse en todas las conciencias y en todos los partidos. Esto es muy importante desde la perspectiva de los problemas económicos que sólo son solubles dentro de un cuadro político que permita hacer eficaces las respuestas técnicas. En resumen, si ningún Gobierno puede renunciar a su responsabilidad ni ningún ciudadano ni grupo político puede eludir su parte de responsabilidad en una hora que no dudo en calificar de histórica, creo que la situación es suficientemente grave como para que intentemos conseguir los principales efectos del Gobierno de concentración sin asumir su evidente costo político».

Es Fernández Ordóñez el que se refería en fecha reciente a la posibilidad de un Gobierno de concentración y, si no se pronuncia claramente en su favor, sí dice que se debe tratar de conseguir los efectos esperables de un Gobierno de concentración.

Pero no se preocupen demasiado porque voy a hablar de esto lo menos posible, pero sí relacionándolo con la situación actual. Sobre la situación actual se han dicho aquí muchas cosas, pero el cuadro macroeconómico de 1977 y lo que puede venir en 1978 nos dicen mucho de la gravedad de la situación. Ese producto nacional bruto que no va a crecer más de un 1 por ciento este año y que puede significar una nueva caída en la renta «per capita»; los precios que pueden situarse en torno al 30 por ciento; las inversiones que vuelven a caer por tercer año consecutivo; el paro que sigue creciendo y ¿quién va a crear los 200.000 puestos de trabajo que serían necesarios el año próximo para que el paro no aumentase?

Aparentemente el único aspecto positivo en el cuadro actual es que las exportaciones aumentarán hasta el final de año en un 13 por ciento, mientras que las importaciones solamente habrán crecido un 1 por ciento. Pero esto más que un síntoma alentador es, en realidad, un síntoma del grado de baja actividad de la economía española; en una economía en la que además no se están produciendo simultáneamente redistribuciones importantes de renta, porque otra cosa sería que hubiese estabilización de la producción con un cuadro general de redistribución de la renta, cosa que no está sucediendo.

Además de estos datos macroeconómicos que pueden encontrarse en cualquier periódico de la mañana o de la tarde, hay síntomas cualitativos todavía no cuantificados suficientemente, pero que son importantes, los protestos de letras en lo que va de año parece que son ya más que en el mes de julio del año anterior. Las sociedades que hubieron de pagar la extraordinaria de julio con letras son muy numerosas y también las que tuvieron que tomar a crédito la paga extraordinaria de julio con un interés para los trabajadores del 8 por ciento. Las empresas nacionales que virtualmente están en suspensión de pagos y que tienen que recurrir a cifras macroeconómicas, al crédito oficial para seguir y además, esto es lógico, porque lo que no se puede permitir España en estas circunstancias es renunciar a una industria siderúrgica o de construcción naval o a tantas otras actividades.

Estos son los hechos como también lo es que todo lo están pagando las pequeñas y medianas empresas, para las cuales hoy hay grandes limitaciones, pero que en la etapa anterior tampoco fueron objeto de atención porque estaban, por así decirlo en frase dramática, bajo la bota del capitalismo monopolista del Estado.

Las empresas grandes y pequeñas que no pueden afrontar los pagos de la Seguridad Social, las quiebras, sí, las quiebras, porque si Ortega dijo que las quiebras —y supongo que se refería a los años treinta— en España eran menos frecuentes porque España era entonces un país rural, en una medida mucho más importante que hoy, todavía en los años cuarenta y cincuenta nos preocupaban mucho más las cosechas que lo que estaba pasando

con las empresas porque había un número mucho menor.

Este es un país ya con cerca de nueve millones de asalariados, y, por lo tanto, lo que pasa en las empresas afecta a toda la economía en su conjunto.

Yo diría que además el pequeño ahorrador se ve defraudado, pero no desde la entrada del Gobierno Suárez, sino que —y estoy refiriéndome a la intervención del representante de la Unión de Centro Democrático— yo diría que desde mucho antes, porque si en 1972 se podían comprar acciones de Telefónica, en base a una publicidad engañosa, por 480 enteros, esas mismas acciones esta mañana se cotizaban a poco más de 90, con el resultado de que ha habido, teniendo en cuenta la inflación, una disminución en el valor de esas acciones de más de un 90 por ciento.

Pero no hay que achacar esto al Gobierno Suárez ni a la democracia ni al desgobierno de la democracia, como algunos podrían querer hacernos pensar. En realidad, hay que achacarlo a que el desarrollo de estos años de la economía española se ha basado en muchos casos en auténticas ficciones, en auténticas farsas, por no referirnos ya a detalles como la regularización de balances, los fondos de inversión, etc., que fueron una gran alegría pasajera del capitalismo español.

Nosotros decimos que para afrontar una situación así, que hemos tratado de resumir, no basta con un simple plan de estabilización. Es necesario algo más. Porque ese plan de estabilización va a llevar inevitablemente, y les ahorro la explicación de cifras de parados posibles porque ya se ha dicho aquí, a una depresión de la que no sé cómo vamos a salir, a no ser que sea con la llegada de los expertos, de los discípulos del profesor Friedman, por decirlo en frase más eufemística, que con las personas que utilizan hoy sus servicios como economistas.

Yo diría, tal como lo resaltaba nuestro Secretario General en una intervención anterior en esta misma tribuna, que la alternativa del Gobierno de la Unión de Centro Democrático, la alternativa monocolor, es todavía más minoritaria y no podrá resolver tampoco la situación.

Cuando se dice: bueno, pero es que un Gobierno de concentración tendría la desventaja

de que estando los comunistas todos los capitales se marcharían. Aparte de que ya se han marchado casi todos los capitales que se podían marchar, el problema está en que un Gobierno monocolor, sea de un tinte u otro, significa que tienen confianza en ese Gobierno sus electores, si es que todavía no han perdido la confianza. Pero nada más. Mientras que en un Gobierno de concentración puede haber una representación de todo, una presencia de todos los intereses y, por lo tanto, se puede intentar sacar adelante la economía española. No quiero entrar en otros detalles, pero sí coincidir con palabras de Enrique Barón cuando decía que si se quiere superar la crisis es necesario que a quienes se exigen sacrificios también se les dé nuevas oportunidades.

Yo pienso que en esas elecciones sindicales los Comités de empresas ya no podrán ser simples jurados de empresa, sino que tendrán que tener muchas más funciones, tendrá que haber una nueva relación dentro de las empresas, un código de derecho de los trabajadores; su presencia en los órganos de dirección para saber lo que pasa, ya que ¿por qué están resistiendo, con todo, las pequeñas y medianas empresas la crisis mejor que las grandes empresas? Porque hay un mejor conocimiento. Porque efectivamente, como decía Lluçh, no les llega a última hora el conocimiento del expediente de crisis o de situaciones dramáticas dentro de las empresas.

Y además de esa mayor participación, de ese mejor conocimiento, hace falta otro esfuerzo: sanear la administración del Estado, que es una administración, como diría Max Weber, prebendaria, de un feudalismo prebendario. Luchar contra la especulación inmobiliaria, tema en el que no se ha tomado todavía ni una sola medida. Acabar con la corrupción, que en las fases de inflación se agudiza, en las Corporaciones Locales, en las Instituciones del Estado, en los puertos, en los aeropuertos, de todo el territorio español.

Yo diría que, además, habría que tener una mayor comunicación con el pueblo desde los órganos del poder.

Aquí, una conferencia en la televisión, sea de un miembro del Gobierno o de un miembro de la oposición, se valora como si fuese a decir las últimas palabras de su vida, cuando al parecer la televisión es la cosa más trivial

del mundo y estamos viendo todos los días a personas durante media hora, y, en cambio, la participación de un miembro del Gobierno o de la oposición nos parece algo fundamental y decisivo. Radiotelevisión Española hay que emplearla para explicar a los españoles los problemas que tenemos y no simplemente como un método de escapismo, como una evasión de la realidad en favor naturalmente de determinados grupos.

Terminaría diciendo que a todos estos problemas no hay que buscar un culpable determinado, no hay que buscar unos grupos concretos que sean los causantes de todos los males. Históricamente, esto lo contemplarán en el futuro como el final del modelo del crecimiento autoritario que entró en crisis no en 1975, ni en 1976, ni en 1977, sino en 1973; es decir, dos años antes de la muerte del anterior jefe de Estado. Por eso nosotros podemos criticar las nostalgias de aquel período porque en aquel período ya estaba entrando en crisis ese modelo autoritario, y no podemos lamentar que de cara al futuro nadie se decida a comprar en bolsa porque para ello no pueden asistir todos, sino los que tienen dinero para ello, y muy pocos además; simplemente los que tienen una gran experiencia. Para qué vamos a recordar la historia de los Kennedy. Fueron una de las pocas familias en los Estados Unidos que supo aprovechar la gran depreciación para hacerse rica con el dinero ganado en la industria del alcohol durante la época de la ley seca, etc. Es decir, la compra de valores no demuestra necesariamente la confianza en el sistema, sino que se tiene dinero sencillamente y que en base a unos principios de economía individual se ha decidido comprar.

Yo creo que no puede imputarse nada de esto a la democracia. La democracia si en España se ha implantado es precisamente para resolver todos estos problemas. Es necesario resolver estos problemas que tenemos por delante. Si se nos ha elegido es para trabajar en ello. La gente no va a entender nuestras disquisiciones de si es que hay una mayoría o una minoría o que tenemos que esperar a que se planteen determinadas cuestiones. Se nos ha elegido para hacer una constitución que democratice el país y para salir de la crisis económica.

Nosotros expondremos en el debate general de los próximos días toda una serie de puntos de vista sobre el tema concreto de cómo salir de la crisis. Porque pensamos que no bastan los programas keynesianos ni la política de rentas al estilo de la O. C. D. E. porque estamos, lo queramos o no reconocer, en una sociedad de inflación con todos sus males y con todos sus problemas, y salir de una sociedad de inflación es sumamente difícil porque lo más probable, si no se toman medidas adecuadas, es entrar en una hiperinflación, de la cual la solución no puede ser sino la que nosotros nos referíamos antes.

En suma, hay toda una situación problemática, hay intentos oscuros y misteriosos de desestabilizar la situación política con crímenes como los de esta semana de «El Papsu» o el del Capitán Merguedas. Hay intentos de desprestigiar al Parlamento diciendo que no ha hecho una Constitución en sesenta días, cuando los anteriores representantes, por así decirlo, no hicieron una constitución para el pueblo español en tantos años. Por eso decimos que la solución no puede venir por un camino de concordia nacional simplemente, o de pacto o acuerdo programático, que eso son primeras aproximaciones, pero que no resuelven la cuestión, porque si un pacto es programático sería regalarles todo, y además nosotros tenemos serias dudas sobre que U. C. D., con ese acuerdo programático, pudiera llevar a cabo esa política.

Nosotros pensamos que hace falta este entendimiento mucho más profundo. La reforma fiscal es importante y hay prácticamente unanimidad, pero la reforma fiscal no es suficiente, el entorno económico es mucha más complejo, mucho más difícil y exige de medidas de emergencia porque estamos en una auténtica emergencia nacional. Yo diría que el panorama ya no cambia simplemente por meses o por semanas, sino por días, y es posible que en el futuro inmediato cambie por horas.

El Gobierno parece haber tomado conciencia de esa situación al convocar este debate, largamente pedido por varios Grupos Parlamentarios, pero lo cierto es que de debatirla a resolverla queda mucho trecho y nosotros tenemos la idea de que solamente conjuntando toda una serie de posibilidades comunes podremos salir de la situación en que nos en-

contramos. Muchas gracias, señor Presidente, señoras y señores Diputados.

El señor PRESIDENTE: Interviene un Diputado del Grupo Parlamentario de Unión de Centro Democrático.

El señor BARON CRESPO: Pido la palabra para una cuestión de orden.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Barón.

El señor BARON CRESPO: He pedido la palabra porque ahora mismo lo que se está planteando es una modificación del Reglamento provisional del Congreso, en la medida en que en el artículo 8.º, apartado 1.º, se prevé una intervención por grupos parlamentarios. Entonces, yo entiendo que, en buena lógica parlamentaria, hay un Diputado del partido del Gobierno que ha defendido el proyecto y el trabajo que se ha hecho en la Ponencia; por lo tanto, lo que se debería de plantear en este caso sería que todos los grupos tengan derecho a réplica, y, además, de esta manera habría un equilibrio. Si renunciamos todos al uso de la palabra, incluso a otro Diputado de Unión de Centro Democrático, al señor Rodríguez Alcaide, le haríamos gracia de escuchar todas nuestras intervenciones.

El señor PRESIDENTE: Entiendo, señor Barón, que el artículo 8.º, dentro de la imperfección con que está redactado, como todas estas normas provisionales, es bastante claro. Por consiguiente, el debate se inicia mediante la defensa del proyecto por un Diputado o Ministro designados por el Gobierno. El Gobierno no ha designado ningún Ministro, ha designado un Diputado; no dice aquí de qué grupo tiene que ser, pero sigue la exposición de los criterios sustentados acerca del proyecto por los distintos Grupos Parlamentarios. Entonces, entiendo yo que el Grupo Parlamentario de Unión de Centro Democrático puede tener criterios sobre el proyecto distintos —no digo que los tenga, sino que los puede tener— de los sustentados por el Gobierno.

En cualquier caso yo recuerdo que usted mismo ha dicho que Unión de Centro Democrático había presentado tantas o casi tantas

enmiendas como el Grupo Parlamentario Socialista. Por tanto, no es necesariamente coincidente, no tiene por qué ser necesariamente coincidente, la opinión del Gobierno, manifestada a través de la defensa del proyecto, y la opinión de Unión de Centro Democrático.

Entiendo que es correcto concederle el uso de la palabra al Diputado de Unión de Centro Democrático.

En cuanto a que sea el último, a que haya réplica o no haya réplica, he de decirle que es el último porque así se ha establecido por la Presidencia, pero no porque tenga derecho de réplica. El señor Diputado debe exponer los criterios de su Grupo Parlamentario en relación con el proyecto, y así me parece a mí, lamentando disentir del señor Barón.

El señor BARON CRESPO: Dado el carácter procesal de la cuestión y el carácter provisional de las normas, insisto en que se someta a debate la cuestión entre los Grupos Parlamentarios aquí presentes, y si no, que se proceda a votar.

El señor PRESIDENTE: Yo estimo que la interpretación resulta lo suficientemente clara como para que no haya que someterlo a debate, señor Barón.

El señor BARON CRESPO: Entonces, que conste en Acta la protesta del Grupo Parlamentario Socialista.

El señor PRESIDENTE: Que conste. Tiene la palabra el señor Gamir.

El señor GAMIR CASARES: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, ante todo quería insistir en la necesidad de que, tanto en el trabajo del Congreso como en sus Comisiones, vayamos tema a tema. Aquí lo que estamos estudiando realmente es un proyecto muy concreto de Reforma Fiscal; no estamos estudiando, sin duda, toda la política económica del Gobierno. Tampoco estamos estudiando hoy día, en este momento concreto, toda la reforma fiscal, dado que ya se ha anunciado que se remitirá a este Congreso un proyecto de ley sobre la Reforma de la Imposición Indirecta y otro sobre la Reforma de la Imposición Directa. Aún más, Unión

de Centro Democrático, como aquí se ha recordado, y el Gobierno, han solicitado, de una manera especial, la existencia de un Pleno para la discusión de los problemas generales de la política económica española.

Permítaseme decir, en nombre de Unión de Centro Democrático, que con esto este partido demuestra una sensibilidad real hacia los temas que siente el país si lo comparamos con los otros Plenos antes solicitados, sin duda importantes, pero de una importancia que calaba algo menos que este tema sobre el cual Unión de Centro Democrático ha pedido un Pleno especial.

A lo largo de las intervenciones que aquí ha habido se han planteado una serie de temas diversos, muchos de ellos digamos muy concretos, sobre la ley, problemas que, sin duda, tendremos ocasión de debatir en los próximos días, pero otros son interpretaciones generales de la misma que quizá es lo más adecuado hacer en este momento.

Dentro de los mismos ha habido ciertos puntos sobre el carácter ideológico de esta norma. Algunos la consideraban poco progresista y sin duda la norma ha tenido también otras críticas que podríamos llamar provenientes de la derecha.

Otro punto que se ha planteado es la importancia o no de ella en relación a nuestro sistema fiscal. Ha habido una alusión breve, como tercer tema, a la relación entre esta norma y un Gobierno de concentración. Y como cuarto punto, importante, se ha tratado del engarce de esta norma dentro de lo que podemos decir política económica general del Gobierno o incluso por algunos de los Diputados se ha hablado de la falta...

El señor PRESIDENTE: Comprendo que el hablar después tiene algunas ventajas y, en efecto, algunos de los oradores que han hablado antes que S. S. han pedido aludir a intervenciones previas. Esto es inevitable, porque lo da el orden puramente cronológico. Le ruego, sin embargo, y perdone la interrupción, que se ciña en lo posible a exponer los criterios de U. C. D. en relación con el proyecto, y no darle a esto el tono innecesario de una réplica. Aunque, repito, ya sé que es muy difícil olvidarse de lo que uno ha oído, cuando se habla al final.

El señor LOPEZ RODO: Entiendo, con el señor Presidente, que hasta ahora el señor Gamir no ha hecho más que contestar o replicar a intervenciones anteriores, y me sumo a la protesta del Partido Socialista, que considera improcedente esta intervención, a no ser que se la dé un giro de ciento ochenta grados y nos enteremos de cuáles son los criterios de U. C. D. sobre el proyecto de ley.

El señor PRESIDENTE: También tengo que decir que el criterio de esta Presidencia y de la Mesa ha sido de la mayor amplitud a la hora de intervenir todos los oradores anteriores, y si yo me permito, porque lo creo así oportuno, que no haya diferencia de oportunidades entre los oradores más que las que se deriven lógicamente de la sucesión cronológica de los hechos, también quiero recordar a todos que han tenido amplitud de criterio suficiente para intervenir y aludir a intervenciones anteriores, sin que se les haya quitado el uso de la palabra. Por lo tanto, mantengo mi criterio. Continúe el señor Gamir.

El señor GAMIR CASARES: La observación del señor Presidente y del señor Diputado es exacta. Realmente, esto era el preámbulo para centrar los cuatro temas y marcar ante ellos la postura de U. C. D.

Había citado las intervenciones anteriores meramente como preámbulo para precisar cuáles pudieran ser los problemas más importantes. Partiendo de cuál es la postura de U. C. D. en cuanto al carácter ideológico mencionado, U. C. D. estima que este proyecto es, sobre todo, profundamente democrático. ¿Por qué? Porque responde al voto popular. El pueblo votó, en primer lugar, al partido de U. C. D. y en su programa estaba esta reforma fiscal.

Por otra parte, si el voto popular fue en primer lugar al partido de U. C. D., el segundo partido más votado fue un partido socialista, o sea, en cierto grado podríamos decir que el voto medio ponderado es un voto centro-izquierda.

U. C. D. considera que este proyecto ideológicamente es un proyecto típicamente de centro-izquierda; no es radical, pero tampoco conservador.

En cuanto a su importancia relativa, U. C. D.

considera que estamos ante un proyecto importante.

Insisto en que no es, ni mucho menos, toda la reforma fiscal ni en su parte directa ni indirecta, pero que sí establece una serie de principios de interés que desde el punto de vista del partido son los siguientes:

En primer lugar, la introducción de una serie de nuevas figuras o de cambio en los tipos de valor, como ese impuesto sobre el patrimonio, como el hecho de la imposición especial para las rentas elevadas y también los impuestos sobre el lujo. Aún deseo destacar que en este campo de los impuestos sobre el lujo, España ya tiene una serie de figuras que han sido mencionadas, y lo digo totalmente de pasada, como la de los cotos de caza o la segunda residencia. Pero, de todas maneras, con este proyecto se amplía la importancia de este tipo de imposición.

Pero lo que es importante y lo que hay que destacar son las normas que hacen que este proyecto se pueda cumplir mejor. El gran problema de la legislación fiscal es su cumplimiento. Y, por tanto, U. C. D. lo que considera importante es plantear normas que permitan un cumplimiento más adecuado de lo que se legisla. Dentro de esas normas quisiera destacar, entre otras, las siguientes. En primer lugar y ante todo, la instauración del delito fiscal. En segundo lugar, la propia publicidad de lo que se va a declarar, tanto en renta como en patrimonio, que, sin duda, es elemento importante de cumplimiento del propio sistema fiscal. En tercer lugar, normas de tipo más técnico, pero importantes, las relacionadas con el secreto bancario, de un lado, y aquellas normas —aparte las relacionadas con el secreto bancario— que regulan ciertos aspectos de las sociedades que podíamos llamar interpuestas. Y en último lugar, otro punto importante en el cumplimiento precisamente de esta normativa, es otra norma que hoy no está aquí, pero que también es básica para que todo lo demás pueda llevarse a cabo, y es el fortalecimiento de la Inspección tributaria en nuestro país.

A esto había que añadir dos temas que parecen técnicos, pero que incrementan la progresividad del proyecto desde el punto de vista de U. C. D., como son el hecho de que

se establezca que el pago pueda ser fraccionado, lo cual, en impuestos progresivos y directos, y en un momento de inflación insisto, incrementa, sin duda, el valor real de lo recaudado; y aparte, el propio sistema de regulación voluntaria, sus efectos y normas son que se incremente lo que se recaude por estos impuestos de tipo progresivo.

Estamos ante un proyecto de real importancia en consideración de U. C. D. Unión de Centro Democrático considera también que, ante un proyecto de este tipo, lo que hace falta es la corresponsabilización de sus miembros, que no tiene que ser necesariamente concentración, pero que implica una responsabilidad compartida ante el tema. Este es el criterio de U. C. D. ante este y otros proyectos aparecidos.

Por último, U. C. D. considera que este proyecto está bien encuadrado dentro del marco general de lo que hasta ahora ha sido la política económica del Gobierno. Insisto en que la política económica del Gobierno va a ser discutida con mucha mayor profundidad próximamente aquí.

Por tanto, en este aspecto, que en otro momento podría llevar a una intervención mucho más larga, voy a concretarme a intentar mostrar cómo este proyecto engarza de manera adecuada en una política, cuyos primeros pasos han sido, sin duda, positivos. El primer paso tomado por el Gobierno de U. C. D. fue la formación del propio Gobierno, y no se quiera aquí caer en paradojas. El Gobierno se formó de una manera que nos recuerda en parte, y lo subrayo, la formación del actual Gobierno francés, en el cual tenemos una coalición que quiere llegar hasta una parte de centro-izquierda, y que lleva a un técnico con prestigio entre la profesión de economistas a dirigir los temas de la política económica.

Algo parecido es lo que ocurre en España con un espectro político en cierto grado similar, y también como técnico, a un profesor de gran prestigio entre los economistas, como es Fuentes Quintana, para dirigir esta política económica, y con una diferencia que, como los economistas aquí presentes conocen, el prestigio de Fuentes Quintana entre los economistas españoles es superior al presti-

gio de Raymond Barre entre los economistas franceses.

Realmente, el equipo económico del Gobierno en este momento es un equipo de una gran consideración técnica, incluso entre personas de diversas ideologías. Y quitando este caso del gobierno de concentración, sería difícil plantear equipos de capacidad técnica similar en este momento.

Aparte de la formación del Gobierno, éste toma una serie de medidas en las cuales se enfrenta con los grandes problemas que tiene hoy la economía española. ¿Cuáles son estos grandes problemas? Según U. C. D. —lo cual creo que es una creencia compartida con otras ideologías—, los grandes problemas son la inflación, el paro y los problemas de balanza de pagos.

El más urgente, aunque no el más importante, es precisamente el tema de la balanza de pagos. Cuando el Gobierno U. C. D. entra y empieza a operar se encuentra en una situación, que ha sido descrita adecuadamente, en la que era irremediable la devaluación. Lo que no ha sido destacado suficientemente son los efectos positivos de esta devaluación.

Se ha dicho que aquí se ha ido ya fuera una gran cantidad de capital y parte ha vuelto. Pero, sin duda, aparte de esto nos encontramos que en el mes de julio las entradas netas llegaron a ochocientos millones de dólares. Si consideramos la pérdida de los doce primeros días, es decir, los efectos de la devaluación, encontraríamos unos incrementos de caja de cerca de mil millones de dólares después de la devaluación. En agosto son 912 millones y de 400 a 500 en septiembre.

Es interesante e importante hacer constar este efecto un tanto espectacular de la devaluación. Se puede decir que en parte es dinero caliente, es dinero especulativo que vuelve. Ahora bien, como es muy bien sabido por los economistas aquí presentes, no siempre una devaluación consigue ese clima de confianza para que vuelva ese dinero, y en este caso se ha conseguido. Por otra parte, los datos pormenorizados, en detalle, que ha publicado el Ministerio de Comercio demuestran que una parte importante de estas entradas eran por otras partidas de la balanza de pagos, y no era precisamente este dinero ca-

liente o dinero especulativo que vuelve aquí. Es decir, ha habido una relación de indudable eficacia. Pero siendo éste el problema más urgente, no es el problema más importante. El más importante —ya dicho aquí— es la situación de inflación realmente grave; el gran problema que tenemos planteado es indudablemente esta inflación, y creo que las causas de la misma, en opinión de U. C. D. —quizá en este punto disidente de algunas de las opiniones de otros partidos sobre estas causas—, las causas que daría U. C. D. como más importantes son, en primer lugar, el hecho de haberse encontrado con la situación de incremento de costes debido al petróleo y el peso de esta factura de Gobierno a Gobierno, sin tomarse medidas hasta la actualidad; el hecho, además de este primer elemento, que sin duda es positivo, de un clima de conflictividad social importante y totalmente lógico tras cuarenta años de represión, y que tiene su parte positiva en cuanto a reivindicaciones salariales se refiere en el campo de una redistribución de las rentas más justa y de una sociedad que busca por este camino de los incrementos salariales una mayor cohesión, pero también hay que reconocer que tiene el problema de incrementos alcistas sobre los precios.

Por otra parte está una política monetaria demasiado libre, además de una política fiscal en la cual había un déficit presupuestario amplio y, al mismo tiempo, un problema heredado de un peso excesivo de los impuestos indirectos, sin duda más inflacionistas que los directos. Añadamos a esto el propio efecto de la devaluación, y nos encontramos con algo que es de todos conocido, pero que hace falta recalcar cuando nos enfrentamos con los objetivos de estabilidad interior de precios. En este caso existen instrumentos que ayudan simultáneamente a ambos objetivos: los instrumentos vía renta, desde una política de inflación, y el caso de la vía de precios, como es una devaluación. La devaluación era totalmente necesaria por la urgencia del problema de la balanza de pagos, aunque se reconocía que tenía su coste en el incremento del problema de la inflación, pero creo que cualquier postura razonable, objetiva, y no partidista tendrá que aceptar que en el ac-

tual momento hacia falta tomar esta medida, incluso tomando en cuenta este coste.

Ante ello el Gobierno ha realizado, U. C. D. ha realizado, una política en las vías típicas de un problema de esta importancia utilizando la vía monetaria, la vía fiscal, la vía comercial y la vía de rentas y precios.

En cuanto a la vía monetaria, la política, siempre difícil de realizar, ha sido una disminución progresiva del ritmo de incremento de las disponibilidades líquidas, que estaba en el 21 por ciento en mayo y que se quiere fijar como objetivo al 17 por ciento en diciembre, que ya estaba en el 19 en julio y que actualmente está aproximadamente en el 18,5. Esta política es importante porque, de un lado, es una política de dinero fácil, estaba financiando la inflación, cualquiera que fuera su causa, pero además de ello hay que hacerlo de manera lenta, porque las antiguas políticas de techo para el crédito eran de efectos mucho más negativos sin duda que este tipo de política de disponibilidad en la situación general de la economía, y se ha actuado sobre la disponibilidad, al mismo tiempo que también se actúa lógicamente sobre el precio del dinero, la medida más básica, recordada muy brevemente: Se sube el tipo de interés del Banco de España, se suben los tipos de interés de los circuitos privilegiados de crédito, al mismo tiempo que se cambian los coeficientes; tema éste importante porque incide no sólo en la inflación, sino, como veremos luego, en la asignación de recursos a medio plazo en el paro.

Se modifican también los tipos de interés del crédito oficial y, en general, se realiza una política de ir a la liberalización de los tipos de interés, se liberalizan los tipos activos y pasivos por más de un año, medida que es positiva porque dará su coste real al crédito y al dinero, permitiendo una asignación hacia el factor trabajo más adecuada dentro de la economía española.

Ahora bien, aunque la política monetaria siempre es un arma a utilizar en un momento de inflación como el que estamos pasando, hay que completarla, sin duda, con la política fiscal, con la política de precios de rentas y con la política comercial.

En cuanto a la política fiscal sus rasgos

fundamentales van a ser el presupuesto y las modificaciones en la imposición indirecta, pero esto, lo quiero recalcar, las normas que estamos estudiando estos días, engarza perfectamente en esta política fiscal antiinflacionista y engarza en ellas en varios sentidos.

En primer lugar, porque por lo pronto incrementa la recaudación, pero la incrementa además a través de impuestos directos, cuya transmisión sobre los precios es muy inferior —costes directos progresivos— que si se hiciera a través de impuestos indirectos, aparte de retraer una capacidad de demanda de las clases más favorecidas del país.

Aparte de esto, tiene no solamente efectos directos, sino otros efectos indirectos, los cuales ya fueron mencionados por el Ministro de Hacienda, efectos multiplicadores de esta norma. Es decir, por ejemplo, el impuesto sobre el patrimonio no es solamente importante por lo que con él se recauda, sino que lo más importante son los efectos que tiene en los impuestos sobre la renta y otros impuestos progresivos en años sucesivos, en el sentido de que, como es lógico, es difícil declarar rentas muy escasas, hacia la baja, cuando al mismo tiempo aparecen fuertes incrementos en el patrimonio.

Es decir, es una pieza que va en la dirección adecuada a una política antiinflacionista que tiene que basarse en utilizar incrementos fiscales e incrementos de los impuestos progresivos, para buscar con ello una reducción del déficit fiscal.

Se ha mencionado aquí, y haré también una breve alusión, la política de control de precios, la política de rentas salariales y la política comercial.

En cuanto a la política de control de precios, después de una devaluación es lógico declarar un control de precios, aunque sabida es su relativa ineficacia, y también es lógico que en el plazo breve de unos meses se pase a algo más coherente, a regular un grupo determinado de productos sobre los cuales se pone un especial énfasis, como ya se ha anunciado en la política del Gobierno.

En cuanto a la política de rentas salariales, es uno de los temas realmente más difíciles, de tratamiento más complejo, sobre todo en este momento por la herencia que se ha reci-

bido en cuanto a una situación represiva de tantos años.

Indudablemente, ante un incremento de los salarios se producen cuatro efectos. El primer efecto es un incremento de los salarios por encima de la productividad que, si el empresario se encuentra con demanda suficiente y se le permite el sistema, procurará trasladarlo a los precios.

El segundo efecto será que si no se reduce la relación beneficios-salarios, produciéndose un efecto redistributivo, puede ser que en algún momento, como tercer efecto de esta reducción de beneficios, llegue a tal límite que desaparezca, lo que puede afectar a la supervivencia de la empresa.

Como cuarto efecto está la utilización por el empresario de técnicas más intensivas, en que podrá utilizar más capital y menos en trabajo por el incremento del precio relativo a la mano de obra.

En esta situación una política lógica es una moderación del ritmo de incremento de los salarios y que al mismo tiempo la política redistributiva se apoye también en el elemento fiscal simultáneamente a ella, con lo cual se consigue una redistribución más auténtica y unos efectos generales sobre la economía superiores o mejores.

Dentro de esta tónica quiero dejar claro que nunca el proyecto es un «do ut des» para ningún pacto social, sino simplemente lo que parece adecuado como receta en este momento ante la situación inflacionista en que nos movemos; la norma que estamos estudiando va en la dirección también adecuada, no es la varita mágica que resuelve el problema, pero sí va en esta dirección al incrementar la parte progresiva de nuestra imposición, con lo cual se utiliza otro instrumento diferente para la política de redistribución.

La mención a la política comercial ha de ser breve. La «policy mix», o mezcla de políticas tipo de cambio-arancel, en el marco de políticas arancelarias, ha sido realizada adecuadamente. Ante una devaluación era lógica la reducción arancelaria y en este caso la vía lógica ha sido la supresión del recargo existente sobre los aranceles.

Esto disminuye el efecto inflacionista de la devaluación y, al mismo tiempo, reasigna

recursos a favor de sectores más competitivos. Ambos efectos son normales en una política de este signo.

En resumen, vemos que ante el problema de la inflación, el Gobierno, en sus dos meses cortos de vida, ha ido tomando un cuadro de medidas en las diferentes ramas de la política económica, monetaria y fiscal, de precios, de rentas y comercial, en la cual se engarza de manera adecuada el proyecto que hoy estudiamos; es decir, que su entorno es el adecuado para este proyecto.

Pasemos, por último, brevemente a este gran problema que, sin duda, es el del paro. Ante el problema del paro también la política económica está engarzándose en la manera lógica, dado el clima inflacionista en el que vivimos. Aquí se ha citado a un premio Nobel, Friedman; podemos citar a otro, a Samuelson, que decía que el premio Nobel más merecido sería el que lograra resolver el cruel dilema entre los problemas del paro y la inflación. Pero dentro del problema, hay que realizar una política antiinflacionista y, sin duda, se está procurando hacer una política en la vía adecuada en relación con el problema del paro.

El proyecto que tenemos que analizar, en su artículo 25, tiene ya importancia no sólo por su cuantía, mejorada por la Ponencia, sino por la nueva línea y la nueva filosofía que establece. Sin duda fue criticable que ante un problema de paro, como el ocurrido en el Campo de Gibraltar, lo que hiciera la política económica fue primar inversiones fuertemente intensivas en capital; es decir, que producían pocos puestos de trabajo por inversión realizada, y que, simultáneamente, requería un tipo de mano de obra especializada que muchas veces incluso hubo que importar. Esta relación entre el problema del paro y la inversión intensiva en capital se rompe de manera adecuada con esta norma. Lo que se hace aquí es utilizar el instrumento adecuado para el objetivo y el problema existente. Si el problema es el paro, el instrumento tiene que ir a ello, no por vías indirectas que pueden afectarse para darle más importancia y más repercusión a los instrumentos que se emplean. Por eso es lógico que lo que se realice sea una actuación directa sobre el

incremento de empleo, actuación que queda a su vez fortalecida por la disminución de los coeficientes en los circuitos privilegiados de crédito y la subida del tipo de interés, pues la mayoría de estos circuitos iban a sectores intensivos en capital. Es decir, se muestra una tendencia y, como es lógico, esos cambios nunca pueden ser bruscos en una economía de la complejidad de la española, pero en estos momentos se muestra la tendencia a ir llevando los incentivos de la política económica hacia sectores y técnicas más intensivas de trabajo. Esta es la dirección más adecuada y creo que es un punto en el que había una cierta concordancia de pareceres en las campañas de los diferentes partidos —entre ellos, indudablemente, el de Unión de Centro Democrático lo recoge—, de ir pasando hacia estas técnicas y sectores más intensivos en trabajo, de lo cual es buena señal precisamente este artículo 25 en una norma en la que no se recoge ningún incentivo de los tipos de inversión que puedan ser intensivos en capital.

Al mismo tiempo, el Gobierno desarrolla la inversión también muy intensiva en mano de obra en una serie de sectores, ejemplos típicos ICONA e IRYDA, para reducir el paro. Este incremento se logra a través del Decreto-ley de 9 de agosto sobre este tipo de actuación. Esta fortalece la política de incremento de la vivienda barata y, al mismo tiempo, también en agosto se lanza una emisión de 20.000 millones de Deuda Pública, relacionados igualmente con el problema del paro; y se puede adelantar que, en el próximo presupuesto, se proyecta incrementar de manera importante lo que va a las concesiones para subsidios de paro, aparte de hacer un presupuesto general y especial sobre el problema del paro.

En resumen, pues, dentro de este cruel dilema en el que nos encontramos se está haciendo una política de procurar atender simultáneamente a ambos temas e intentar darle toda su radical y dramática importancia

al problema del paro. Y precisamente, insisto, esta norma es lógica en cuanto que se engarza muy bien en este doble tema de la inflación y del paro, simultáneamente, y es una de las pocas normativas que puede romper ese cruel dilema del que nos hablaba Samos.

Y ya, para finalizar, simplemente recordar, en resumen, la opinión de Unión de Centro Democrático. Por una parte, estamos, pues, ante una norma que ideológicamente responde a la filosofía de Centro Democrático y que, lógicamente, es profundamente democrática en cuanto recoge el voto popular en este terreno, que, al mismo tiempo, tiene, sin duda, importancia; pero no es la reforma fiscal que nos llegará próximamente.

Y nos encontramos, por último, con que engarza de manera adecuada en este cuadro, en este entorno general de la política económica a la que nos hemos referido, política económica de la que hoy sólo he mencionado sus grandes líneas, pero que será estudiada en toda su complejidad y en toda su problemática, abordando muchos otros de los temas que pueden surgir (temas que van desde los problemas de especulación, por ejemplo, hasta los de reformas de estructuras comerciales) en los debates sobre la política económica general que tendrán lugar en los próximos días en los Plenos de este Congreso. Nada más.

El señor PRESIDENTE: Señores, continuaremos las deliberaciones sobre el articulado del proyecto mañana a las cinco de la tarde, pero ruego a los representantes de los Grupos Parlamentarios que, si lo tienen a bien, se reúnan con la Mesa a las cinco menos cuarto para decidir lo que proceda en relación con lo que establece el artículo 9.º de las normas y, en su caso, para la agrupación de artículos, a efectos de su discusión y defensa, que es lo que establece dicho artículo 9.º de las normas.

Se levanta la sesión.

Eran las nueve y diez minutos de la noche.

Precio del ejemplar 50 ptas.

Venta de ejemplares:

SUCESORES DE RIVADENEYRA, S. A.

Paseo de Onésimo Redondo, 34
Madrid

Depósito legal: M. 12.580 - 1961

RIVADENEYRA, S. A.—MADRID